

ÍNDICE

Colegios privados piden que el fondo para Educación se reparta en función de las necesidades de las familias. EUROPA PRESS	Pág 2
Catalunya: el lunes se decidirá si la selectividad tendrá que hacerse con mascarilla. LA VANGUARDIA	Pág 2
"La ayuda debe llegar al alumnado en desventaja social". INFOLIBRE	Pág 3
El 56% de los alumnos de bachillerato duda sobre qué estudios superiores elegir al finalizar el ciclo, según un informe. EUROPA PRESS	Pág 5
Universidades planea un vuelco en los campus: pondrá coto a los falsos asociados y habrá catedráticos no funcionarios. EL PAÍS	Pág 5
La escuela concertada amenazan con acudir a los tribunales tras dejarles fuera de las ayudas. EUROPA PRESS	Pág 7
Más de dos millares de alumnos, pendientes de las PAU. LA VANGUARDIA	Pág 8
Una tirita en una herida sangrante. EL PAÍS	Pág 8
El consenso por el cambio educativo. LA VANGUARDIA	Pág 9
Los profesores asociados claman contra el ministro Castells: "No ceda a la facilona tentación de fulminar a los precarios". EL PAÍS	Pág 10
La selectividad china de los hijos de la Covid-19. EL MUNDO	Pág 11
El Gobierno asegura que las pruebas de la EvAU se están celebrando "con normalidad". EUROPA PRESS	Pág 12
Una dicotomía incomprensible. EL PAÍS	Pág 12
Ciudadanos presenta voto particular para que la educación concertada no quede fuera de los planes de reconstrucción. EUROPA PRESS	Pág 13
Educación dotará al Programa PROA de refuerzo escolar con 40 millones de euros. EUROPA PRESS	Pág 13
Triple error en el examen de Historia de España de la EvAU en Madrid. EL PAÍS	Pág 14
Por qué la FP se ha convertido en la opción más atractiva en España. LA RAZÓN	Pág 15
Los directores ven inasumible la guía de Educación sobre la covid para el próximo curso. LA OPINIÓN de Murcia	Pág 16
Detectan un brote de Covid-19 con cuatro contagiados en el claustro de un instituto de Tarragona. EL MUNDO Cataluña.	Pág 17
La Selectividad más anómala de la historia finaliza este viernes: más tardía, con mascarilla y aumento de sedes. EUROPA PRESS	Pág 17
La selectividad valenciana incluye por error 'La fontana de oro' en los 'Episodios nacionales' de Galdós. EL PAÍS	Pág 18
Aumentan en un 22% los alumnos que se presentan a la EvAU en Madrid. MAGISTERIO	Pág 19
Este curso hay 6.000 titulados más en Bachillerato en Andalucía con los nuevos criterios. MAGISTERIO	Pág 20
La Asociación de Centros de FP presenta sus propuestas para la organización del curso 2020-21. MAGISTERIO	Pág 20
Los jóvenes de 18 años se inclinan por los estudios superiores en periodos de recesión. MAGISTERIO	Pág 21
Desconfianzas ante el nuevo curso académico. EL DIARIO DE LA EDUCACIÓN	Pág 22

Colegios privados piden que el fondo para Educación se reparta en función de las necesidades de las familias

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) las ayudas de reconstrucción para compensar la crisis sanitaria de la COVID-19 en Educación han de dirigirse "a colegios sostenidos con fondos públicos y familias en función de sus necesidades".

"Independientemente de su titularidad, ya sea escuela pública o concertada, las consecuencias de esta situación no han sido las mismas para todos los centros. Tampoco ha sido igual en todas las zonas del país, ha argumentado la asociación.

En este sentido, considera que se ha de tener en cuenta la brecha digital existente y "el apoyo que precisa cada colegio en concreto para beneficiar al alumnado más vulnerable".

Asimismo, ha manifestado que es "imprescindible" que, al margen de si la escuela concertada en su totalidad recibe un incremento de fondos públicos para paliar la crisis sanitaria, "se realice un mayor control de las cuotas que cobran a las familias".

CICAE ha recordado que "lleva años insistiendo en las irregularidades de parte de la escuela concertada, que exige pagos a los padres en etapas de educación obligatoria, en contra de la legislación vigente".

"Las familias atraviesan ahora una situación de mayor dificultad económica, por lo que las administraciones públicas han de velar aún más por su acceso a la educación en el centro sostenido con fondos públicos que elijan, sin sufrir indefensión ante condiciones no contempladas por la ley", ha manifestado.

Finalmente, la asociación defiende que "la mayor equidad" en el reparto de ayudas públicas "se conseguirá si se tienen en cuenta las necesidades de los colegios respecto a la inversión tecnológica que precisan, la contratación de profesorado, la protección de la salud y, sobre todo, si se dirigen directamente a las familias que más están sufriendo las consecuencias de esta crisis".

LA VANGUARDIA

Catalunya: el lunes se decidirá si la selectividad tendrá que hacerse con mascarilla

Los alumnos con positivos o contactos de Covid harán la prueba en septiembre

CARINA FARRERAS. Barcelona 03/07/2020

El órgano responsable de la preparación de las pruebas de acceso a la universidad (PAU, EVaU o selectividad) en Catalunya apeló ayer a la máxima responsabilidad de los estudiantes que la próxima semana (del 7 al 10) se presentan a las pruebas de selectividad. Esos días no se medirá la fiebre al entrar, pero si un estudiante presenta síntomas compatibles con el Covid, como fiebre o tos seca, debe comunicarlo por teléfono a su tutor y al vocal del tribunal que le corresponde, ir al centro de atención sanitaria primaria que le corresponde y seguir las instrucciones del médico. "Pero fiebre no es siempre Covid", explicó el secretario del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Lluís Baulenas.

En el supuesto de que el médico descarte la presencia del virus podrá seguir las pruebas con normalidad y recuperar la pérdida a la semana siguiente, en que se celebrará una repesca en el tribunal de incidencias que, como cada año, ofrece la posibilidad de examinarse a quien ha perdido la oportunidad por algún percance.

En el caso de que el estudiante sea sospecha de Covid, contacto o enfermo debe permanecer, como es obligación ciudadana, en aislamiento. Para esta situación el CIC ha previsto que estos jóvenes puedan presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre, aunque les contará la nota como si se hubieran presentado en julio. Las fechas para la segunda convocatoria de las PAU aún no se conocen, pero probablemente se convoquen a finales de septiembre o en la primera semana de octubre.

Baulenas anticipó las medidas sanitarias que han sido necesarias introducir en la celebración de estos exámenes de gran complejidad logística pues mueven a millares de personas y materiales. Solo en papel son 1,5 millones de folios que pesan 15 toneladas.

Están involucradas unas 5.200 trabajadoras entre vigilantes, tribunales y correctores. Los alumnos se elevan a 39.904, lo que constituye un récord desde que se celebran y suponen un 12,5% más que el año pasado debido a los mayores aprobados en bachillerato.

Este mayor volumen de personas y las normas de distanciamiento físico impuestas por Salud, ha obligado a multiplicar los espacios para evitar aglomeraciones y desplazamientos. Los tribunales pasan de 160 en el 2019 a 216 este año, las localidades (de 20 municipios a 63), vigilantes (de 1.600 a 3.500) y correctores (de 1.414 a

1.600). Los tribunales estarán situados en sedes universitarias (138), institutos (72) y colegios concertados (18).

Otra de las normas introducidas es que los alumnos con necesidades especiales y que realizan los exámenes con una duración mayor estarán este año mezclados con sus compañeros y no irán, como en ocasiones anteriores, a un tribunal específico.

Los estudiantes tendrán siempre el mismo sitio asignado y una vez en el aula, no podrán salir hasta una hora después de iniciado el examen. Llevarán mascarilla durante todos los ejercicios, en los desplazamientos y fuera de los centros. No obstante, el CIC valorará el lunes la posibilidad de que se la retiren durante la prueba ya que estarán separados dos metros de sus compañeros. Este aspecto, señaló Baulenas, se valorará un día antes en función del tiempo y la evolución de la pandemia. "Parece que las temperaturas bajarán un poco", se congratuló. Este es un aspecto importante porque no todos los edificios, que estarán ventilados, cuentan con aire acondicionado.

El CIC recuerda que la seguridad pública no es competencia de los docentes ni del personal de tribunales. En este sentido, ha enviado una carta a todos los estudiantes, que de natural forman corrillos, recordándoles las normas de mascarilla y distancia física.

infoLibre

"La ayuda debe llegar al alumnado en desventaja social"

Sabela Rodríguez Álvarez. 03/07/2020

La escuela concertada sobrevuela una vez más el debate político, también en tiempo de crisis. La Comisión de Reconstrucción del Congreso dirime entre las distintas fórmulas para la salida de la crisis que ha dejado la pandemia. Las secuelas en las aulas están en el centro del debate y de nuevo las divergencias entre izquierda y derecha se hacen evidentes. El borrador de conclusiones en materia social expuesto este miércoles habla, en su artículo dieciocho, de "políticas educativas" centradas en la "corrección de la brecha educativa" y en el fomento de la equidad. Los esfuerzos económicos, por tanto, estarían volcados en la pública: "La totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa".

Es el acuerdo al que han llegado Unidas Podemos y el Partido Socialista, pero que se ha encontrado con el rechazo de los partidos conservadores de la oposición. Ciudadanos, que sí ha logrado alcanzar puntos comunes en materia de economía, sanidad y Unión Europea, se distancia de las posturas gubernamentales en torno a la escuela. La intención de la formación naranja, que ha enmendado el articulado, pasa por seguir negociando "para que el texto final aparque las cuestiones ideológicas y pueda garantizarse, por ejemplo, que todas las opciones del sistema público de educación, incluidas la educación concertada o la educación especial, salen reforzadas de esta crisis".

Tampoco el Partido Popular comulga con la exclusión de la escuela concertada. "Esta propuesta es un ataque directo a la libertad de enseñanza y de elección que los padres tienen reconocida en la Constitución", ha denunciado la diputada conservadora Rosa Romero, una postura que resume con exactitud la línea seguida tradicionalmente por su partido. "Es una propuesta sectaria e ideológica y en la que no vamos a estar de acuerdo", ha añadido.

La Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha exigido igualmente la retirada de este punto, que ha tildado de "provocación". JxCat, por su parte, reclama eliminar precisamente la frase que concede a la "educación pública de gestión directa" la totalidad de los recursos. También el PNV ha enmendado las sugerencias en materia educativa. Sin éxito: las enmiendas han sido rechazadas. La propuesta ha salido adelante con el apoyo de Unidas Podemos, PSOE, ERC y la abstención de EH Bildu.

Los sindicatos y los expertos consultados por este diario se muestran taxativos: si alguien requiere de ayudas para superar la crisis, son los alumnos en riesgo de exclusión. ¿Y dónde está ese alumnado? Ahí es donde algunas voces introducen matices. Los datos, sin embargo, apuntan de manera clara a la escuela pública. La privada financiada con dinero público, con el 25% del alumnado, asume sólo un 14,9% de estudiantes de origen extranjero. La segregación no sólo es evidente, sino que está sobradamente probada. Primero, por una cuestión económica: las familias que miran a la concertada asumen un gasto medio por alumno de 1.212 euros, más del doble que quienes acuden a la pública. Los colegios concertados, además, profundizan en la ubicación selectiva de sus centros, decisiones basadas en los niveles de renta, de acuerdo a un estudio elaborado por la Universitat de València. Según confirma el Ministerio de Educación en relación al curso 2016-2017, la escuela concertada tampoco tiene especial interés por los pueblos pequeños: el 77% de la privada se localiza en municipios de más de 25.000 habitantes. Ya en 2017, otro informe situaba al sistema educativo español como el sexto más segregador en suelo europeo.

"Los fondos deberían llegar a los colegios que escolarizan alumnado en desventaja social y tener en cuenta preferentemente estos centros, que son en su inmensa mayoría públicos", señala Paco García, secretario general de CCOO Enseñanza. Es de justicia, añade el portavoz sindical, que la pública recupere además "los niveles de inversión perdidos" durante los años de recortes.

Maribel Loranca, su homóloga en UGT, defiende que sean los centros educativos los que expresen sus necesidades, en función de las circunstancias del alumnado. "Hay que focalizar el esfuerzo en el alumnado que esté en situación de vulnerabilidad social", esgrime. Si la gran mayoría está "en una red determinada", habrá que tomar decisiones en consecuencia, pero "si también hay alumnos en la otra red, habrá igualmente que hacer esfuerzos".

Ambos sindicatos coinciden en que el criterio fundamental no es otro que atender a los estudiantes con mayores necesidades, pero recalcan que por el momento no se ha adoptado ninguna posición concluyente, de manera que se mantienen cautos en las valoraciones. La Comisión de Reconstrucción aún deberá recorrer varios pasos hacia la consolidación de sus decisiones. El próximo viernes, reunirá las conclusiones de los cuatro grupos de trabajo en un sólo documento que contenga las propuestas definitivas. A partir de entonces, el texto estará preparado para someterse a la votación final.

Saturnino Martínez, profesor de Equidad y Educación en la Universidad de La Laguna, entiende que el razonamiento pasa por que "el fondo de reconstrucción favorezca a las personas en riesgo de exclusión" y en ese sentido, remacha, es la escuela "pública la que llega al alumnado que no cubre la concertada". A partir de ahí, surge lo que denomina "razonamiento de grupo". Por explicarlo gráficamente: existen dos grupos y la decisión orbita sobre dónde dirigir los fondos. "Tendré que destinar el dinero al grupo que está peor, en este caso es el de la pública", opina el docente. Él mismo plantea si existe la posibilidad de encontrar diferencias internas en cada grupo y él mismo responde: "Por todos los estudios que tenemos sobre la mesa, yo no lo creo". Sí puede ocurrir, expresa, que "muchas familias que acuden a la concertada hayan visto disminuidos sus ingresos". En este caso, argumenta, "si hay gente que se ha empobrecido lo que habrá que hacer es garantizar oferta de calidad en la red pública y esto es lo que están haciendo los fondos".

Revisión de la concertada

Lo cierto es que el debate en torno a la concertada ha ido adquiriendo tintes eminentemente ideológicos con el paso de los años, perdiendo de vista el objetivo genuino con el que fue ideada. Hace 35 años el Gobierno de Felipe González diseñó el actual sistema de conciertos con el propósito de corregir los desequilibrios en el modelo dual y universalizar la enseñanza obligatoria y gratuita. Teniendo en cuenta la robusta red de colegios privados, procedentes del franquismo y dominados por la Iglesia, la opción sobre la mesa fue la concertada como herramienta para una integración paulatina en el sistema.

"Hay una perversión con la concertada" y tiene que ver con "situar la demanda social como criterio para organizar la red", reflexiona García. "La Constitución habla de la libertad de enseñanza entendida como la libertad de creación de centros docentes y luego la red se organizará teniendo en cuenta la programación", pero el Partido Popular "cambió ese paradigma para consagrar la demanda social". Eso, argumenta, no es otra cosa que "una perversión del concepto que inicialmente representaba la concertada: garantizar la escolarización en un momento de universalización cuando la pública no llegaba". A juicio del sindicalista, el debate, que no ha dejado nunca de sobrevolar los discursos políticos, tendría que servir para "restituir el carácter originario de los conceptos educativos".

Martínez recuerda que la ley de los ochenta "lo que hace es regular una situación que ya existía de facto". No es, por lo tanto, que crease un nuevo escenario partiendo de la nada, sino que antes de aquello "no había criterios para distribuir fondos públicos a centros privados". La privada, por tanto, "no tenía ninguna responsabilidad y el Estado no podía incidir sobre su gestión". El sistema de conciertos viene a regular eso, aspira a apuntalar el control público.

Por aquel entonces, enfatiza el profesor, "la privada y la Iglesia salieron en masa para protestar, pero luego vieron que era una manera de conservar el negocio y comenzaron a defender" el modelo de conciertos. El principal problema a la hora de una revisión, más de tres décadas después, es la "demanda social" que congrega. "Hay una reivindicación muy grande por parte de los defensores de lo público de acabar con la concertada, pero uno de cada cuatro estudiantes la elige", por lo que la "legitimidad social" es robusta. "Ir contra el modelo es complicado por los intereses que ya hay creados", sostiene el experto.

Las fuerzas conservadoras han hecho de la libre elección el principal emblema en su defensa de la concertada. A su alrededor, el Partido Popular ha construido una fortaleza que la ha blindado incluso en los años más duros de la crisis. En consecuencia, el gasto público en educación privada ha crecido un 292% desde que hay datos, más de cien puntos por encima de la red pública, que sigue por debajo de los niveles precrisis. Los colegios concertados, además, han apoyado su actividad en el cobro ilegal de cuotas ante la inacción de las autoridades.

Loranca incide en que la pandemia ha puesto de relieve unas carencias del sistema educativo "que ya existían" y que es ahora cuando "los poderes políticos tienen que demostrar si entienden la educación como prioridad". A partir de ahí, la sindicalista apuesta por una revisión de "todo el sistema" que pase por los currículos y llegue hasta la propia función docente. "Lo que menos conviene al sistema educativo es establecer una guerra política en base a titulares".

europapress.es

El 56% de los alumnos de bachillerato duda sobre qué estudios superiores elegir al finalizar el ciclo, según un informe

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un 56% de los estudiantes reconocen no tener claro qué van a estudiar tras finalizar el bachillerato, según la XV Encuesta Tendencias Universitarias 2020 que ha realizado la Universidad Francisco de Vitoria (UFV).

En concreto, los resultados de la encuesta realizada a 2.937 estudiantes de 1º de Bachillerato apuntan que un 45% de los alumnos tiene dudas y un 11% asegura "no tener ni idea".

En relación con las causas de su indecisión, un 72% de los entrevistados afirma no haber recibido mucha información sobre los grados a los que pueden optar (20%), y no disponer de herramientas suficientes para elegir (52%).

La mayoría (49%) de los estudiantes prefiere cursar su carrera en una universidad que esté dentro de su comunidad autónoma, frente al 28% que optaría por desplazarse a otras provincias y un 23% que desearía estudiar en el extranjero.

Respecto al nivel formativo recibido en los centros educativos, un 86% de los alumnos considera que la formación recibida en sus colegios es bastante buena; y un 53% valora su nivel de inglés como muy bueno.

Por otro lado, el 40% de los alumnos de primero de bachillerato aseguran dedicar más de 10 horas de estudio a la semana para sacar adelante su curso.

LOS AMIGOS POR ENCIMA DE LAS RRSS

De este modo, la encuesta revela que el tiempo libre que les queda lo destinan especialmente a salir con los amigos (90%), escuchar música (85%), practicar deporte (75%) y navegar por internet y redes sociales (69%).

Sobre las preocupaciones que tienen los jóvenes españoles, el estudio apunta que en las primeras posiciones están el calentamiento global (77%) y la pérdida de valores morales (76%), seguidos del paro juvenil (35%).

Asimismo, un 50% de los estudiantes desearía trabajar fuera de España, mientras que un 26% cree que tendrá que buscar trabajo fuera del país. Además, el 97% de los encuestados opina que vivirá igual o mejor que sus padres.

Por otra parte, el informe muestra que las redes sociales se han convertido en el medio preferido para mantenerse informados de la actualidad (32%), por encima de la radio y la prensa impresa (5%). La red social favorita para comunicarse es WhatsApp (92%) y, por tanto, el teléfono móvil (53%).

Finalmente, la información que más interés despierta entre estos estudiantes son los temas sociales (41,7%) y la música (38,8%), seguidos de la política (24,5%) y la economía (15%).

EL PAÍS

Universidades planea un vuelco en los campus: pondrá coto a los falsos asociados y habrá catedráticos no funcionarios

El borrador del estatuto docente, que debe aprobarse en el Parlamento, reorganiza las vías de acceso y progresión profesional en los centros públicos de enseñanza superior

J.A. AUNIÓN / ELISA SILIÓ. MADRID 4 JUL 2020

El Ministerio de Universidades planea dar un gran vuelco en la organización de los campus públicos. Los aspirantes a un puesto fijo de profesor tendrán una vía alternativa a la de funcionario, la del contrato laboral indefinido, si sale adelante la propuesta plasmada en un borrador de Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) redactada por el ministerio y a la que ha tenido acceso EL PAÍS. El proyecto, que requiere la reforma de la ley de Universidades, crea las figuras de profesor titular y catedrático contratado con las mismas condiciones y requisitos de entrada que sus homólogos funcionarios, consolidando y fortaleciendo una doble vía de acceso laboral a la Universidad sobre la que se lleva largo tiempo discutiendo. Ya la propuso, sin éxito, hace algo más de un lustro el comité de expertos del ministro de Educación del PP José Ignacio Wert, y los campus públicos de Cataluña y el País Vasco llevan años experimentando con esta vía de acceso no funcional.

El proyecto contempla la eliminación de las categorías de profesor ayudante y de profesor ayudante doctor, y establece unos severos requisitos para ejercer como docente asociado, la figura creada para que los profesionales más destacados de distintos sectores económicos y sociales pudieran aportar su experiencia a las enseñanzas superiores, pero que se ha pervertido con la anterior crisis hasta convertirse en una puerta

falsa de entrada precaria a la docencia universitaria. Actualmente, hay algo más de 5.000 ayudantes y profesores ayudantes doctor y más de 33.000 asociados trabajando en los campus, para los que el proyecto prevé un periodo de adaptación a la nueva norma. Por otra parte, se crea una nueva figura de profesor doctor, con contrato temporal y dedicación completa, que se asemejaría más bien en sus condiciones a las de los actuales ayudantes doctores, obligaría sin embargo a las universidades a convocar plazas para estabilizar su situación después de cinco años. Estos cambios no afectarían, en todo caso, a la situación de los 11.000 contratados doctores ya asalariados, que gozan de un puesto indefinido en la Universidad.

La propuesta permite seguir contratando como profesores, aunque “de forma transitoria y limitada en el tiempo”, a titulados superiores que todavía no hayan conseguido el doctorado. Así, los campus públicos solo podrán ofertar este tipo de plazas durante los próximos tres años y los contratos podrán durar un máximo seis años. “La contratación de profesoras y profesores contratados/as no doctores/as tendrá carácter excepcional y se limitará a casos en que no existan en los procesos selectivos personas candidatas que estén en posesión del título de doctor”, aclara el texto del proyecto.

El borrador no especifica si serán las universidades, las autonomías o el Estado quien decida cómo se distribuyen entre las dos vías de carrera profesional las ofertas de plazas. “Se duplican las figuras, dejando que sean las comunidades y cada Universidad la que decida si saca plaza de funcionarios o de laborales”, se lamenta Ramón Caballero Klink, secretario de Universidades de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF). “Nos ha sorprendido porque no tiene mucho que ver con el documento anterior del ministro Pedro Duque. El proceso de laboralización es un ataque a los funcionarios, crea una carrera paralela laboral incluso en categorías hasta ahora funcionariales: profesor titular y catedrático de universidad”. El sindicalista cree que no favorece a los contratados: “No es lo mismo ser indefinido que funcionario. Tienen menos seguridad jurídica y administrativa y económica”.

Los rectorados se encuentran con el muro de los sindicatos cuando tratan de hacer un gran fichaje sin atender a las tablas salariales fijadas y buscando vericuetos para pagarles. Un rector, que prefiere mantener el anonimato mientras no madure el proyecto, acoge con más optimismo que la CSIF el borrador: “Yo veo bien, razonable, que creen las nuevas figuras. Racionaliza lo que ya se hace, pero cada uno a su manera tirando por donde puede”. Aunque encuentra peros: “No entra en los sueldos, en pagar de manera distinta... Y no sé cómo van a terminar con el problema de los profesores asociados”.

Verdaderos asociados

Los profesores asociados van a tener que demostrar que tienen un trabajo principal fuera de la universidad e impartirán un máximo de 60 horas de clase cada curso, cuando ahora en muchos casos superaban las 100 con “un salario frecuentemente por debajo del salario mínimo”, se reconoce en el texto. Isabel de la Cruz, profesora asociada de Sociología en la Universidad de Valencia desde hace más de 20 años, no oculta su frustración con el borrador del ministerio: “Llevamos años, años y años —todo el mundo lo sabe— trabajando en unas condiciones de precariedad absoluta, llevando adelante una cantidad de docencia brutal... Y, sinceramente, esperábamos que nos estabilizaran. ¿Van a terminar con la precariedad acabando con los precarios? Terminan con el rollo alega lo ilegal pero ¿cómo se nos va a posibilitar el ingreso en la universidad? O es simplemente un “gracias por los servicios prestados y adiós. Ha estado muy bien, han sido ustedes muy baratos y ahora estabilícense como puedan”.

La sorpresa de De la Cruz ha sido mayúscula por la contundencia con la que el ministro Castells se ha manifestado públicamente en el Congreso y el Senado contra la situación de los asociados. El político ha llegado a decir que cobran “sueldos de miseria” y que es “un escándalo, un despilfarro de recursos y un mecanismo de frustración”. Hay 33.954 profesores bajo esta etiqueta, según los últimos datos del ministerio, lo que representa el 34,1% de los profesores de las universidades públicas.

El coto a estos asociados crea un hueco enorme en los horarios de docencia de los departamentos. A la hora de acreditarse para optar a ser funcionarios (un proceso burocrático que centraliza la agencia estatal de calidad Aneca) su experiencia docente, si se aprueba el estatuto, va a valer tanto como la investigadora. La asociada Isabel de la Cruz y CSIF aplauden este punto. “El valor de la docencia hay que reconocerlo, porque si tú no formas luego no tienes investigadores. Nosotros investigamos, pero como ni tenemos contratos de tres años no podemos ser jefes de la investigación”, explica la profesora precaria.

El secretario del CSIF aguardaba “con impaciencia” las pasarelas de las que hablaba el ministro Castells para los asociados y se ha llevado una decepción. “Pueden permanecer durante tres años dando clase —que es lo normal en las medidas transitorias—, pero ¿cómo favoreces el paso de asociados a las nuevas figuras? Vuelve a inhibirse y lo deja en manos de las comunidades que podrán hacer procesos selectivos”. El escenario, si no fuese por la crisis económica que arrecia, sería propicio para que los falsos asociados diesen el salto a un puesto fijo. La Universidad está tan envejecida que de 2016 a 2023 va a perder el 16,76% de su plantilla: unos 5.400 catedráticos, 6.300 profesores titulares y otros 4.500 no funcionarios. Cada año quedan vacantes 1.500 plazas y no va a quedar otra que convocar plazas. El temor es volver a crear otro cuello de botella de miles de investigadores aguardando una oportunidad de tener trabajo fijo.

Internacionalización

Las tasas de profesorado extranjero en España –2,2% del conjunto de las universidades públicas– son bajísimas si se comparan, por ejemplo, con Reino Unido que multiplica por 10 esa cifra. Y eso ha tenido como consecuencia “una reducida movilidad de su PDI [personal docente e investigador], en detrimento de la

necesaria apertura de la Universidad al amplio intercambio de ideas", se razona en el documento. La internacionalización es clave para atraer alumnos extranjeros y aumentar el prestigio de los campus. Por eso, si se aprueba el estatuto, para lograr una plaza de titular el candidato habrá tenido que investigar en la Universidad menos nueve meses. Sin embargo, este requisito no se le pediría a los catedráticos. Hace un lustro la mitad de 5.000 profesores encuestados no habían estado en el extranjero más de tres meses.

El borrador de estatuto crea también la figura de profesor extraordinario para poder traer profesionales de fuera sin cortapisas burocráticas con un contrato de hasta de cinco años. "La mayoría del talento de los 30 a los 45 años está fuera de España, si pones el cauce para que vuelvan pero no el dinero no hay nada que hacer", advierte el rector. En 2017, según datos de la agencia gubernamental de evaluación ANECA, solo 20 docentes de universidades de la UE se certificaron para ejercer en España por la vía específica prevista para ello. El 40% de los extranjeros se concentran en Cataluña —la Pompeu Fabra tiene un 15,3% de docentes foráneos—, donde se sitúan los campus que lideran los *rankings* españoles. En esta comunidad hacen un llamamiento internacional para cubrir los puestos, el tribunal es de medio mundo y la Universidad se compromete a no sacar la plaza antes de que todos los interesados hayan podido optar a acreditarse.

Endogamia y transparencia

El 73% de los profesores imparte clase en la Universidad en la que se doctoró. Además, el tribunal de una plaza es elegido por el departamento. Endogamia pura. "Uno de los profesores [son tres] podrá ser propuesto por la Universidad los otros dos serán por sorteo estatal sobre el conjunto del profesorado", se afirma en el borrador de estatuto. El problema de base es que una parte grande de las vacantes se ofertan hechas a medida del candidato del departamento, coloquialmente son "plazas con bicho".

Universidades quiere que haya un registro único de todas las plazas docentes que se oferten y así se recoge en el documento, pero ya hace año y medio trascendió que organizaba una bolsa de empleo y poco se ha movido. Hoy las vacantes aparecen publicadas en el BOE pero ningún organismo centraliza todas las convocatorias. La Ley Orgánica de reforma Universitaria (RLU, 1983) ya obligaba a informar de las plazas al Consejo de Universidades, y de nuevo la LOU conminó a ello. Pero las universidades hacen oídos sordos.

Los sindicatos se quejaron hace dos semanas de que no se contase con ellos para redactar el texto en un comunicado conjunto y también lo ha hecho la Federación de Jóvenes Investigadores, que acordó con el ministro Pedro Duque el estatuto del personal investigador en formación, el EPIF: "Se ha hecho totalmente a espaldas del personal investigador, sin buscar el diálogo y sin evaluar propuestas conjuntamente".

europapress.es

La escuela concertada amenazan con acudir a los tribunales tras dejarles fuera de las ayudas

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) –

La escuela concertada ha advertido este viernes que está dispuesta a acudir a los tribunales o llevar a cabo una campaña de protestas en la calle tras quedar fuera del programa de ayudas contemplado en el documento de medidas sobre Política Social y Sistema de Cuidados de la Comisión de Reconstrucción del Congreso. El documento ha salido adelante con los votos de PSOE y Unidas Podemos y ambos partidos han rechazado incorporar al texto un programa de ayudas a la escuela concertada, como solicitaban Ciudadanos y PP.

Una decisión que ha sido duramente criticada por las principales asociaciones de padres, sindicatos e instituciones titulares de la enseñanza concertada en el ámbito nacional, que han denunciado "la flagrante discriminación" que esta exclusión de las ayudas supone para una gran parte de la población española.

"Familias, profesores e instituciones educativas están trasladando a nuestras organizaciones su enorme malestar ante esta situación, por lo que es nuestro deber seguir trabajando en defensa de sus derechos con todos los medios que estén a nuestro alcance, incluyendo movilizaciones o acciones jurídicas, siempre y cuando no se perciba un compromiso que, más allá de las palabras vacías, garantice que no se van a hurtar los derechos de millones de españoles", han recordado en un comunicado conjunto.

Entre otras cuestiones, la escuela concertada ha defendido que conclusiones aprobadas para el ámbito educativo suponen "un claro agravio para el 25% de nuestro sistema educativo" y pueden suponer "la asfixia" de instituciones que no tendrán medios para seguir manteniendo sus proyectos educativos. "Unos proyectos integradores, equitativos, de calidad, accesibles para todos y que materializan la libertad de enseñanza, tal y como está concebida en nuestra Constitución y nuestro entorno democrático europeo", han recordado.

En la misma línea, han rechazado que se trate de "una enseñanza elitista, como algunos pretenden hacer creer a la sociedad" para defender que es "una enseñanza social que refleja la pluralidad familiar, sociolaboral, económica, ideológica, cívica, cultural y religiosa de la sociedad española actual". "Excluirla es una clara

segregación impropia de democracias europeas que promueven la libertad de enseñanza y la financian sin complejos para favorecer una libertad de elección real", ha subrayado.

En este marco, la escuela concertada considera "obvio" que "se está aprovechando la debilidad del PSOE para hacer avanzar el programa de extrema izquierda de Podemos en contra de un servicio que se presta tanto desde la enseñanza pública como desde la enseñanza concertada, tal y como reconoce la propia LOE (artículo 108)". "La Comisión de Reconstrucción ha dado un paso preocupante que segrega a alumnos, familias, profesores e instituciones con una mayoría simple y con la ausencia de Vox, digna de mencionar, en un escenario tan complejo como el que estamos viviendo", ha censurado. En este escenario, ha indicado que teme que las conclusiones aprobadas "sean el preludio de una futura ley de educación que adolece de la misma falta de consenso que sus promotores denunciaron en la LOMCE".

LA VANGUARDIA

Más de dos millares de alumnos, pendientes de las PAU

El Govern no despejó ayer la duda sobre la realización de las pruebas de acceso a la universidad (PAU o EvAU) que afectan a 2.200 estudiantes en Lleida

CARINA FARRERAS. BARCELONA 05/07/2020

El Govern no despejó ayer la duda sobre la realización de las pruebas de acceso a la universidad (PAU o EvAU) que afectan a 2.200 estudiantes en Lleida. La consellera de Salut, Alba Vergés, que sí especificó que dentro de las medidas de seguridad sanitaria entraba la excepción de las entradas y salidas de los trabajadores de la comarca para continuar con la actividad económica, dijo que no se había contemplado la convocatoria de los estudiantes de selectividad que se examinan de las pruebas a partir del martes.

Un número indeterminado de estudiantes debe cruzar el perímetro de la comarca para ir a la capital, Lleida, donde se encuentran los tribunales que les corresponde, mayormente en las facultades de la Universitat de Lleida. Se trata de los alumnos de institutos y colegios de las localidades de Pla d'Urgell, Garrigues, Noguera y Segarra.

La cuestión no es solo de desplazamiento de una comarca a otra sino también de aglomeración. Las medidas extraordinarias de las PAU comportan, no obstante, la obligación de la mascarilla y la de la distancia física.

Las autoridades sanitarias y la Secretaria d'Universitats se han comprometido a valorar entre hoy y mañana la situación para permitir los exámenes como estaban previstos, establecer nuevos tribunales en esas localidades fuera de la comarca, o suspender el examen para esos alumnos y que puedan realizarlos en septiembre en calidad de convocatoria ordinaria. Los tribunales de Tremp, Tàrraga, Viella y la Seu d'Urgell mantienen la convocatoria.

EL PAÍS

Una tirita en una herida sangrante

El resultado del Estatuto del Personal Docente e Investigador dependerá de lo rigurosa que sea la aplicación de los principios de mérito y capacidad

LUIS SANZ MENÉNDEZ. 05 JUL 2020

El Ministerio de Universidades ha elaborado un "borrador para consulta" del real decreto del Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI), incluyendo la reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU). Las propuestas se justifican con base en "cuatro realidades incontestables": envejecimiento y relevo del profesorado, precariedad, falta de perspectivas profesionales y derechos y escasa internacionalización y movilidad.

El documento modifica las figuras de profesorado contratado, introduciendo las de catedrático y profesor titular contratados (alineándose con Cataluña y País Vasco) y enuncia la equiparación de laborales y funcionarios; consolida la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) –cuando muchos pedían su eliminación– aunque "simplifica" sus requerimientos y trámites; introduce el sorteo en los tribunales, con mayoría de "externos" a la universidad convocante; y define algunos requerimientos de movilidad (nueve meses para profesor titular, nada para catedrático), etcétera. En resumen, una tirita en una herida sangrante. El texto es poco ambicioso y no resuelve los problemas que identifica. Tampoco facilitará que las universidades puedan competir internacionalmente, ni servir al tejido productivo.

Los problemas de la universidad española son conocidos: autonomía, atracción y retención del talento, financiación, rendición de cuentas, etcétera. Resumiendo y simplificando: recursos, gobernanza e incentivos. El borrador aborda el problema del profesorado, donde quizás pueda curar algunos rasguños (antes de que lo hagan los tribunales de justicia), tales como el encadenamiento de contratos de profesores visitantes o la situación de los profesores asociados dedicados solo a la universidad (denominados falsos asociados). Endogamia, clientelismo, favoritismo, localismo son sustantivos frecuentes para referirse al acceso y promoción, pero estas realidades están ausentes.

El resultado dependerá de lo rigurosa que sea cada universidad y departamento en la aplicación de los principios de mérito y capacidad. La propuesta tampoco garantiza, si se ampliasen las plantillas, que se recupere el talento que emigró. Todo dependerá de la financiación disponible.

Pero el modelo de financiación (que depende de cada comunidad autónoma) está ausente. Sabemos que la financiación pública directa es insuficiente y comparada con la de países similares, entre dos y tres veces inferior. Además, los criterios para su asignación se centran en el número de alumnos y son continuistas. Otros países con problemas parecidos han ligado el modelo de financiación a los resultados, incentivando el mejor reclutamiento del personal docente e investigador (PDI). Copiemos de ellos y ampliemos lo que se hizo bien aquí.

1. El Gobierno francés ha definido una estrategia: A) Mejorar las retribuciones del personal de investigación y universidades, alineándolas con las retribuciones de los países de la OCDE y con la función pública. B) Relanzar el empleo científico, asumiendo los procedimientos de reclutamiento internacionales. C) Revalorizar el doctorado. D) Mejorar la entrada en la carrera docente-investigadora y su desarrollo. E) Establecer “contratos plurianuales alineando objetivos y recursos”.

2. La Comisión Europea y la OCDE han recomendado sistemas de financiación plurianual basados en los resultados para España.

3. Se pueden imitar medidas, como las de Italia, con su Evaluación de la Calidad de la Investigación (VQR), cuyos resultados determinan la asignación del 25% de los fondos de financiación de cada universidad, sin duda, un incentivo a reclutar a los mejores.

4. Para mejorar la calidad del reclutamiento, con independencia de elevar la tasa de reposición, se podría aumentar significativamente el cupo actual del 15%, dentro de la Oferta de Empleo Público (OEP) de las universidades, destinado a antiguos investigadores Ramón y Cajal con certificado I3, que se fijó en la *ley Montoro* de Presupuesto de 2018 y evaluar cómo se ha aplicado por las universidades. La implementación es responsabilidad de las autonomías, pero los ministerios de Universidades y de Ciencia e Innovación deben promover los cambios con la visión de futuro del conjunto del sistema.

Luis Sanz-Menéndez es profesor de Investigación del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC.

LA VANGUARDIA

El consenso por el cambio educativo

ISABEL CELAÁ. Ministra de Educación y Formación Profesional. 06/07/2020

La economía del conocimiento y la globalización han acentuado nuestro perfil como sociedad del riesgo que anticipó el sociólogo alemán Ulrich Beck. La pandemia por el coronavirus es un riesgo global de dramáticas consecuencias en la salud, el empleo y la cohesión social que ha supuesto una gran prueba de estrés para los sistemas educativos. Ha puesto de relieve sus fortalezas y sus debilidades, así como su necesidad de modernización desde un espíritu de reconstrucción y consenso. Si la reconstrucción es tarea de todos, la modernización educativa también lo ha de ser y no puede esperar más porque responde a una demanda amplia y plural que viene de lejos.

La única certeza de nuestro tiempo es el cambio permanente por desafíos disruptivos que nos exigen gran capacidad de respuesta compartida. El 90% de los científicos son contemporáneos nuestros y creadores del conocimiento que acelera el cambio social y la revolución digital. El diagnóstico y la evidencia experta coinciden en que los sistemas educativos han de avanzar hacia enfoques más inclusivos y más competenciales, en los que el currículo quede nucleado en temas fundamentales y el alumnado adquiera la capacidad de aprender a aprender a lo largo de su vida. Creo que esta visión del sistema educativo reúne todo el consenso democrático y deberíamos ponerlo en valor.

También hay un elevado consenso cuando decimos que necesitamos un sistema educativo más flexible, abierto y centrado en cómo se aprende, más que en cómo se enseña. Ello implica dirigir el foco hacia los procesos, el trabajo colaborativo del profesorado y la implicación educadora de la comunidad para construir auténticos ecosistemas de aprendizaje bien conectados y de alto rendimiento. El derecho a la educación como escolarización está evolucionando hacia el derecho al aprendizaje, un cambio cualitativo de calado que presupone avanzar más en la personalización educativa y garantizar la alfabetización múltiple a todo nuestro alumnado para desenvolverse en un futuro impredecible y complejo.

Necesitamos un sistema más flexible, abierto y centrado en cómo se aprende, más que en cómo se enseña

De la pandemia podemos extraer valiosas lecciones compartidas por todos. La primera es la digitalización plena del sistema educativo. La segunda es la necesidad de reforzar y cuidar la equidad educativa, y la tercera es el desarrollo del aprendizaje personalizado que debe contar con recursos y ratios adecuados. En un

momento como el que vivimos, los actores políticos y los agentes educativos debemos centrarnos en lograr acuerdos estratégicos para hacer que la educación sea motivo de orgullo para la ciudadanía y un verdadero motor para nuestro sistema productivo.

Como ministra de Educación y Formación Profesional quiero ofrecer un gran acuerdo en ámbitos que cuentan con un consenso de fondo. El pacto es cosa de valientes, afirmaba Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución. La modernización de la formación profesional, la extensión de la educación infantil, la digitalización plena del sistema, el impulso a las STEM y la reforma de la profesión docente son cinco componentes clave donde es posible y preferente llegar a acuerdos duraderos. Del mismo modo, creo que ha madurado ya el debate sobre la necesidad de revertir la cultura de la repetición con la consecuente pérdida de talento y sobrecoste para el sistema (el 14% de todo el gasto no universitario), así como recuperar la equidad a fin de mejorar los resultados del conjunto del sistema.

La nueva ley educativa (Lomloe) sigue en periodo de enmiendas hasta septiembre. Así, tras una elevada participación en la elaboración del proyecto, la tramitación parlamentaria sin duda va a enriquecer el texto. Es una ley que recoge el amplio consenso social en materias como los derechos de la infancia, la coeducación, la educación afectivo-sexual, el desarrollo sostenible, la educación cívica y la no discriminación y no segregación por cualquier condición social y personal. Es una ley modernizadora, que amplía la autonomía de los centros, que recupera el concepto de escuela democrática, donde las familias deciden y participan, que apuesta por un aprendizaje más interdisciplinar y competencial, que limita las repeticiones y que refuerza la equidad y la mejora continua de resultados a través de evaluaciones-diagnóstico.

Hacer compatible la excelencia con la equidad es posible. No solo no se contraponen, como piensan algunos, sino que se refuerzan mutuamente. Aspiramos a modernizar un sistema educativo con altas expectativas y alto rendimiento que universalice el aprender a aprender como garantía cultural y competencial. Queremos que la ley sea duradera bajo un nuevo espíritu de consenso y reconstrucción que nos merecemos como país, como economía competitiva y como comunidad cívica. Es hora de situar la educación y la formación profesional en el nivel de consenso social y político con el que funciona toda democracia avanzada.

EL PAÍS

Los profesores asociados claman contra el ministro Castells: “No ceda a la facilona tentación de fulminar a los precarios”

La asociación que representa a estos 34.000 docentes reclama una solución por escrito

ELISA SILIÓ. MADRID 06 JUL 2020

Los profesores asociados andan revolucionados. El pasado sábado trascendió el borrador del Estatuto del Personal Docente Investigador (PDI) redactado por el Ministerio de Universidades, que propone crear una carrera laboral de profesores paralela a la de los funcionarios y ponerles coto a ellos, los 33.954 asociados, que perciben un salario ínfimo —desde 300 euros— y que suponen ya un 34% del total de la plantilla. Este lunes la Asociación del Profesorado Asociado de las Universidades Públicas ha publicado una dura carta en la que carga contra el ministro del ramo, Manuel Castells. “No solo se nos rebajan las horas de docencia, sino que además se nos otorga un salario ‘accesorio’, en la sempiterna idea de que el colectivo PDI Asociado seguirá *in aeternum* como un accesorio de usar y tirar: ¿proponen realmente aumentar nuestra precariedad o es que se trata de una broma de mal gusto y de humor negro?”, se pregunta la asociación que aúna plataformas de los distintos campus.

El ministerio quiere que los asociados demuestren que cuentan con un trabajo principal fuera de la universidad —se creó la figura para aprovechar la experiencia de los profesionales— y que no impartan más de 60 horas de docencia al año, cuando muchos superan ahora las 100. En opinión del colectivo, el ministerio no les ofrece una plataforma sólida para dar el alto al contrato indefinido o a la carrera de funcionario. El periodo de transición durará tres años en los que supuestamente las comunidades autónomas convocarán oposiciones, pero la crisis económica dificulta este escenario. El borrador no habla de financiación, fundamental para poder estabilizar a esta plantilla.

Los asociados habían depositado muchas esperanzas en el ministro Castells, quien había denunciado su situación laboral en el Congreso y el Senado: “Es un escándalo, un despilfarro de recursos y un mecanismo de frustración. (...) Surgieron para que profesionales pudiesen compartir su experiencia con una retribución residual y una compensación moral”. Incluso el sociólogo llegó a decir: “La mayoría de los que investigan se sienten maltratados por el sistema. O podemos mover esos límites, o nos vamos a casa”.

Desencantado, el colectivo afirma en su misiva: “Para nuestra decepción, el documento no reconoce el fraude de ley sistemático que ha persistido durante años; ni siquiera parece ofrecer la más mínima solución a ninguno de nuestros problemas principales: el salario, la promoción y la estabilización”. No entiende la “obsesión de atraer el siempre aludido talento estrella que está allende nuestras fronteras” cuando considera que hay tanta gente formada y en situación precaria. “El PDI Asociado ha hecho penetrar en la aislada burbuja universitaria dinámicas enriquecedoras de la sociedad real y, al tiempo, ha devuelto a la sociedad elementos del mundo universitario que no salían nunca de su burbuja”.

Un apéndice externo

Los asociados recuerdan que no se les puede ver como “un apéndice externo y versátil al que dar lo que sobra, al que utilizar para reducir el horario del funcionariado, al que tirar a la calle de manera indigna, contra la ley y por causas peregrinas, a veces por vendettas personales, o familiares, y en ocasiones por decisiones meramente cortijeras”.

Y piden a Castells una solución por escrito “que concrete cómo dejaremos de tener un salario basura y cómo podremos entretejer una relación laboral estable y digna en el nuevo marco legislativo universitario”. Aseguran que las distintas Administraciones —ministerio, universidades y Gobiernos autonómicos— se “pasan la pelota” sin que nadie aborde el problema laboral y quieren abandonar ya esa partida.

La próxima semana Castells tendrá una consulta preliminar con los sindicatos, las comunidades autónomas y la conferencia de rectores (Crue), y tras reelaborar el texto hará una propuesta definitiva a la Mesa Sectorial de Universidades. Las negociaciones previsiblemente serán en septiembre

El grupo [P]recarios de la Investigación, de CCOO, ha lamentado en un comunicado que el borrador del estatuto haya trascendido “porque al final se crea un estado de opinión generalizado que en el mejor de los casos no tendrá nada que ver con el resultado y, en el peor, simplemente se retirará ante una posible avalancha del estado de opinión negativo”. Como ocurrió, cuentan, en 2011 con los socialistas en época de Ángel Gabilondo como ministro. La idea del PP de José Ignacio Wert, en 2013, también quedó en agua de borrajas.

EL MUNDO

La selectividad china de los hijos de la Covid-19

Retrasado un mes por la pandemia, hoy tiene lugar el 'gaokao', el examen de ingreso a la universidad, entre medidas de seguridad y controles de temperatura. Casualmente, los estudiantes que se examinan hoy nacieron en 2002, el año del SARS

LUCAS DE LA CAL. Corresponsal Pekín. Martes, 7 julio 2020

Varias sombrillas dan cobijo a los estudiantes que aguardan su turno para entrar en la escuela secundaria Chen Jinglun de Pekín, en el céntrico distrito de Chaoyang. Sus padres los observan al otro lado de la valla blanca que les separa, están incluso más nerviosos que sus hijos. No dejan de hacerles fotos, de capturar ese instante clave que marcará su futuro y su escalada social en la dura competencia laboral china. Los chavales dan un último repaso a los apuntes. Dentro de la escuela les espera el **gaokao**, el examen de ingreso a la universidad.

"En las noticias siempre dicen que es la prueba más difícil del mundo. Mi hijo estaba triste porque este año no ha habido ceremonia de graduación por el nuevo brote que hubo en Pekín. Además, han sido unos meses muy duros por la pandemia, no era fácil concentrarse para estudiar", explica una de las madres.

Todos los estudiantes pasan un control de temperatura antes de entrar en unas aulas que acaban de ser desinfectadas. En la capital de China se presentan a esta selectividad 49.225 estudiantes de los 10,7 millones que se examinarán en todo el país. La mayoría, los que residen en zonas donde se han reportado estas semanas casos de coronavirus, tendrán que pasar las casi nueve horas que dura el examen con la mascarilla puesta. Y los pupitres tienen que estar a una distancia de dos metros.

Mientras los adolescentes van entrando en orden a la escuela, llegan buenas noticias de la Comisión Nacional de Salud. Por primera vez desde que comenzó el brote vírico en Pekín, originado en el mercado de abastos más grande de la capital, el pasado 12 de junio, no se ha reportado un solo caso de contagio. En estas semanas se ha testado a más de la mitad de una población de 21 millones de personas. Hoy, tras localizar en total 335 infectados, se puede decir que las medidas aplicadas han funcionado.

El sol y los más de 30 grados pegan con fuerza en la capital. Una escena muy diferente se vive a 1.300 kilómetros al sur, en la ciudad de Huangshan, donde la imagen de la mañana eran los estudiantes acudiendo al examen en barcas por las fuertes inundaciones que estos días han convertido las calles en ríos. La potencia asiática está viviendo una de las peores inundaciones en décadas por las intensas lluvias, que ya han dejado más de un centenar de personas muertas o desaparecidas.

Se da la casualidad que los estudiantes que se examinan hoy son los nacidos en 2002, el año que surgió el brote del SARS, la anterior epidemia (coronavirus SARS-CoV) que dejó 8.098 infectados, 774 muertos y que salió de los murciélagos de una cueva de la provincia de Yunnan, cuyo coronavirus había mutado en las civetas que se comían en un mercado de Cantón, desde donde pasó a los humanos.

Este año ha sido la primera vez que el **gaokao se ha pospuesto** -concretamente un mes- desde 1977. Aunque el examen se estableció en 1952 y se detuvo durante el parón de la Revolución Cultural de Mao Zedong. También ha sido la primera vez que los alumnos han tenido que preparar las pruebas siguiendo las clases online desde sus casas debido a las cuarentenas y cierres de escuelas.

La mayoría de ellos sólo tendrán esta oportunidad para acudir a la universidad. Una presión extra si se mantiene la creencia de que esta es la única forma en China de garantizarse un buen futuro laboral y un salario digno. Entrar en la universidad sigue suponiendo un salto en la escala social. Por ello, los adolescentes se pasan meses estudiando al menos 12 horas diarias.

Cada provincia del país tiene su propia versión del examen, aunque siempre la prueba incluye preguntas de Chino, Matemáticas y un idioma extranjero. Además, el alumno puede escoger otros temas como Historia, Política, Geografía, Biología, Física o Química. Este año se han habilitado 7.000 centros en todo el país con 400.000 aulas dotadas de cámaras de circuito cerrado para evitar las trampas. También hay 945.000 personas que trabajan como supervisores para evitar noticias como las que se publicaron hace un par de días y que han ocupado muchos minutos en los informativos locales.

Varias universidades de la provincia de Shandong, al este de China, habían descubierto a 242 graduados que entre 1999 y 2006 robaron la identidad y la puntuación del **gaokao** de otra persona para inscribirse en los centros universitarios. Es el caso, por ejemplo, de una mujer llamada Gou Jing. Otra chica se hizo pasar por ella y robó su nota en 1997 para entrar en la universidad, ya que Gao había decidido continuar estudiando otro año más para sacar una puntuación más alta y lograr entrar en una mejor universidad.

Guan Yanping, un funcionario del departamento de educación de Shandong, dijo a la prensa que la mayoría de estos casos ocurrieron antes de 2006, cuando los recursos de identificación de la región eran limitados. "En los últimos años, la provincia ha aprovechado al máximo las tecnologías de identificación disponibles y ha fortalecido la gestión de cada procedimiento de reclutamiento en universidades y colegios, con diversas medidas para evitar que puedan colarse estos impostores", agregó Guan.

Al mediodía, los estudiantes salen de la escuela Chen Jinglun de Pekín durante un pequeño receso para comer antes de continuar con los exámenes. "Aquí viene el futuro de China", suelta con desdén un camarero mientras conversa con otros hombres. Todos se ríen y observan con atención a uno de los estudiantes, que lleva mechas en el pelo y un tatuaje en el brazo. "Espero que esta generación sea mejor y más abierta que la de esos hombres que se ríen", añade una chica que presencia toda la escena.

europapress.es

El Gobierno asegura que las pruebas de la EvAU se están celebrando "con normalidad"

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha afirmado este martes en la rueda posterior al Consejo de Ministros, que las pruebas de la EvAU (la antigua Selectividad) que se están desarrollando estos días en las distintas comunidades autónomas, se están celebrando "con normalidad".

"A pesar de las exigencias que impone la nueva normalidad, las pruebas de evaluación del Bachillerato para el acceso a la universidad, se están celebrando con normalidad en las distintas comunidades autónomas", ha señalado.

Montero ha agradecido el trabajo de coordinación a todas las comunidades autónomas por "multiplicar las sedes donde se están celebrando estas pruebas" por parte de las universidades. "Sin duda, contribuye a seguir fomentando la seguridad tanto de las personas que acuden a hacer la Selectividad como de aquellos que vigilan los exámenes", ha dicho.

La portavoz del Ejecutivo también ha mandado un "mensaje de ánimo", en nombre del Gobierno, a los estudiantes que están participando en estas pruebas, así como "fortaleza a todos" y "suerte". "Y les pedimos que no se pongan nerviosos, son pruebas fundamentales para que puedan elegir la carrera o titulación que pueda construir su futuro", ha aconsejado, recalando que "seguro que todo esto saldrá bien".

EL PAÍS

Una dicotomía incomprensible

FÉLIX GÁLVEZ PONCE. 08 JUL 2020 - 00:35 CEST

Como miembro del tribunal de esta atípica EvAU en la URJC, y tras sus primeros pasos, me invade una doble sensación: por un lado, las exquisitas medidas higiénicas adoptadas, los protocolos sencillos, las aulas a menos del 50% de capacidad y el despliegue de medios humanos y materiales perfectamente sincronizados. Por otro, la incertidumbre, la falta de planificación y de medios y la burocratización también en lo higiénico, del inicio de curso en los institutos y colegios, donde, sin medios a la altura del problema, todo apunta a que ni se podrán cumplir las distancias interpersonales ni el resto de medidas básicas que eviten que se puedan convertir en focos del virus. Una dicotomía incomprensible, medios y planificación para los exámenes de estos días en la universidad y negación del problema y ausencia de medios para todo el curso próximo en colegios e institutos.

Félix Gálvez Ponce es Director de Instituto

europapress.es

Ciudadanos presenta voto particular para que la educación concertada no quede fuera de los planes de reconstrucción

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha presentado este miércoles un voto particular para incluir a la escuela concertada y la especial en el documento de medidas de política social para la reconstrucción del país tras el Covid19, que se votará en dos semanas en el Pleno del Congreso.

La decisión de los dos partidos en el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, de excluir a estos dos modelos educativos de las ayudas destinadas a la reconstrucción tras la pandemia ya fue criticada por Ciudadanos y de hecho motivó que el documento de política social fuera el único que rechazó el partido 'naranja' en la Comisión de Reconstrucción.

A pesar de que tanto socialistas como morados ya han asegurado que las ayudas se destinarán a la escuela pública y no se harán cambios al respecto, Ciudadanos se ha mostrado "optimista" en estas semanas sobre una posible negociación en este tema.

Ahora, los de Inés Arrimadas presentan un voto particular con el que quieren que en España se garantice el derecho a la educación con los niños "como únicos destinatarios", sin tener en cuenta el territorio, la unidad familiar o el centro educativo. Es decir, incluyendo a todos los modelos educativos como destinatarios de las ayudas del Estado. Según ha explicado el partido, el objetivo es "hacer valer el principio de no dejar a nadie atrás" en esta crisis, como se acordó en la Comisión de Reconstrucción creada en el Congreso.

ACUSA AL GOBIERNO DE "PREJUICIOS IDEOLÓGICOS"

"Esta exclusión fundada únicamente en ideología choca con ese principio de no dejar a nadie atrás" denuncian los naranjas en la exposición de motivos de su voto particular, en la que también señalan que es "incompatible con la voluntad de consenso y acuerdo" que sí se ha podido alcanzar en el resto de documentos --Sanidad, UE y Economía-- negociados en la Cámara baja.

En su voto particular, recogido por Europa Press, Ciudadanos muestra también su incompreensión porque PSOE y Unidas Podemos no acepten sus propuestas que, a su juicio, "solo buscan corregir la discriminación que comportan sus propuestas".

"Al final, no cabe otra opción que el que tal negativa, por ser manifiestamente contraria a los principios elementales de igualdad, sea el resultado de meros prejuicios ideológicos y que la insistencia con que los mismos se reiteran sea la consecuencia de la impaciencia que siempre mueve al que desea zafarse de un debate en el que hace tiempo que perdió toda razón", insisten los naranjas.

europapress.es

Educación dotará al Programa PROA de refuerzo escolar con 40 millones de euros

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación y FP retomará el Programa PROA (Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo), puesto en marcha con el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con un presupuesto inicial de 40 millones de euros.

Así lo ha afirmado en declaraciones a Europa Press el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, que se ha reunido este miércoles con el Consejo Escolar del Estado para poner en común las propuestas para el inicio del próximo curso 2020-2021.

Según indica Tiana, este programa de recuperación y refuerzo escolar estará dirigido a aquellos alumnos que durante la pandemia han ido más rezagados que el resto.

En un principio, esta iniciativa estará financiada con fondos del Ministerio de Educación y FP que se repartirán a las comunidades autónomas, aunque la idea, según manifiesta Tiana, es que más adelante sea co-financiada con las comunidades autónomas y que el presupuesto para 2021 sea mayor.

"El PROA tuvo una evaluación muy favorable, pero después, el programa como tal no continuó, pero sí en algunas comunidades, que siguieron financiándolo ellas, y luego se fue transformando en otro programa sobre abandono escolar --explica el secretario de Estado--. Ahora, con todo esto, hemos valorado los programas que hay de este tipo de refuerzo y hemos retomado el nombre PROA Plus".

Según asegura Tiana, este programa tenía dos vertientes: una de refuerzo con algunas actividades extraescolares, y otra de apoyo a los centros educativos de secundaria.

PRESUPUESTO ADICIONAL AL FONDO DE 2.000 MILLONES

Este 'nuevo' programa es uno de los tres que tiene preparado el Ministerio con un presupuesto adicional a los 2.000 millones que abonará en septiembre a las comunidades autónomas, de forma que en total este montante ascendería a unos 2.700 millones.

El primero de estos programas es el de becas, que para el curso 2020-2021 se incrementará en 386 millones, es decir, un 23%, mientras que otro de ellos es el de 'Educa en digital', con el que se prevé movilizar 260 millones de euros para digitalizar la educación y para dotar de equipos y de conectividad a quienes tienen más dificultades.

Según ha asegurado Tiana, que se ha mostrado "abierto" a propuestas, la reunión de hoy con el Consejo Escolar del Estado ha sido "productiva" y en ella ha predominado el "buen ambiente".

EL PAÍS COM. DE MADRID

Triple error en el examen de Historia de España de la EvAU en Madrid

Se pidió a los alumnos que analizaran unos años del reinado de Isabel II que, en realidad, corresponden a la regencia de María Cristina

VICTORIA TORRES BENAYAS. MADRID - 08 JUL 2020

"Salieron del examen desconcertados, conmocionados y decepcionados, algunos lo contaban sin poder aguantar las lágrimas", recuerda Esther Díaz, profesora de Filosofía del instituto La Serna de Fuenlabrada (Madrid), que acompañaba el martes a sus alumnos en los exámenes de la antigua selectividad, ahora Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU). Lo que pasó fue que la pregunta principal de Historia de España, una asignatura troncal en Bachillerato, estaba mal redactada, lo que puede dar al traste con su nota y, de paso, con su futuro. Básicamente, se les pidió que analizaran unos años del reinado de Isabel II que, en realidad, se corresponden más bien, aunque no exactamente, con los de la regencia previa de su madre, María Cristina, y del general Espartero.

El problema no afecta a los 43.300 alumnos que se enfrentan a la EvAU en Madrid porque los de ciencias lo hicieron el lunes y su examen "sí estaba bien". Lo sufrieron los alumnos de letras, y no todos, porque en esta materia hay preguntas cortas y a una de desarrollo, en la que pueden elegir dos opciones. Estaba en el apartado 3 del comentario de texto de la opción B —la A era la creación del Estado franquista—, por lo que es difícil cuantificar el número de damnificados. Por ejemplo, del instituto La Serna hicieron la prueba mal planteada 60 de 106.

Díaz tranquilizó como pudo a sus estudiantes y comunicó lo sucedido a su instituto, que esta misma mañana ha presentado una reclamación "en defensa de los derechos de sus alumnos" ante el tribunal de la Universidad Rey Juan Carlos, donde se examinaron, explica el director, Julián D. Rincón Mateos.

Según el instituto, es "un triple y tremendo error". Para empezar el enunciado "no se corresponde con el dado por la universidad para preparar las pruebas". El original es "el reinado de Isabel II (1833- 1868): la primera guerra carlista. Evolución política, partidos y conflictos. El Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845". Sin embargo, en el examen entregado a los alumnos, decía "el reinado efectivo de Isabel II (1833-1845). Evolución política. La Constitución de 1845".

El enunciado es, además, "contradictorio, puesto que las fechas están mal y se corresponden más bien "con la regencia de María Cristina y Espartero". En tercer lugar, "hace alusión a un concepto que no existe ya en el temario, el de reinado efectivo". Isabel II fue proclamada mayor de edad con 13 años en 1843 y los examinadores preguntaban por los años en los que reinó de verdad, pero el término "efectivo" ya no se usa, lo que podía liar a los alumnos.

La pregunta generó "confusión" y, al expresar sus dudas a los profesores que cuidaban el examen, se produjo "una concatenación de errores" que se sumaron al inicial. "En cada aula, los profesores, como buenamente pudieron porque muchos no son de Historia, dieron respuestas diferentes sobre cómo entender la pregunta", se lamenta el director. Pero ahí no quedó la cosa. Díaz cuenta que un profesor fue aula por aula diciendo que solo "se les iba a corregir esa pregunta si desarrollaban el reinado efectivo".

Esta advertencia llegó en distintos puntos del examen según las universidades y, en algunos casos, a 30 minutos del final. "Algunos ya habían salido del aula y otros no pudieron terminar el examen porque tuvieron que rehacerlo, entre los meses que llevan encima, los nervios, la mascarilla, el calor...", añade el director, que se queja de que no les dieran más tiempo. "Incluso un alumno rompió el examen y le dieron otro para volver a empezar", añade la profesora.

Paula Madera, de letras mixtas y que quiere ser contable, es una de las perjudicadas. "Los de ciencias nos habían asustado porque su examen fue complicado, pero cuando vimos que era Isabel II nos pareció asequible e incluso para nota. Franco lo descarté porque no lo había repasado. Me dije: 'Un minuto, relájate y empieza'. Pero eché un ojo al comentario de texto y vi que la cronología no encajaba, así que decidí ponerme primero con lo demás". Buena idea, ya que cuando en el "minuto 45 de 90" le corroboraron el error, pudo afrontar la

pregunta larga sin dudas. Salió contenta y se encontró “con el panorama”, porque muchos de sus compañeros les había ido “fatal”. “Es un error garrafal que si lo comenten profesores de Historia qué nos van a pedir a nosotros”, alega. La pregunta vale tres puntos, pero afecta al comentario de texto, con lo que están en juego hasta 4,5 puntos sobre 10.

El instituto pide “lo que piden los alumnos: poder examinarse otra vez”, aunque se temen que se tratará de arreglar “aplicando benevolencia en la corrección” o vía reclamación alumno por alumno. Proponen que se haga de nuevo el viernes, el último día, que se dedica a coincidencias. Pero el examen no se va a repetir, según han decidido a última hora del día el tribunal único y los organizadores de la EvAU. Rosa de la Fuente, vicerrectora de estudiantes de la Complutense y coordinadora de la prueba, ha explicado que “se detectó el error al empezar el examen, se comunicó a todas las universidades para que lo subsanaran sobre la marcha y se ha aplicado el protocolo habitual”: elaborar un informe.

La comisión organizadora, en su reunión de todas las tardes para analizar los incidentes del día, ha visto el informe y ha optado por pedir a los correctores que den por válidas las dos respuestas posibles y que hagan “una valoración cualitativa y global del conocimiento del tema en virtud de la coherencia y la calidad del texto del examen”, aunque no responda “en su totalidad a la cuestión”. También les piden que valoren “la posibilidad de que, por falta de tiempo, no se hubiera podido completar”. En un comunicado, consideran que “las medidas adoptadas han evitado que los estudiantes resulten perjudicados” y califican los hechos de “incidencia”, en ningún momento de error.

“Pero es un error de bulto, no del matiz, y en la propia formulación”, subraya Esteban Álvarez, presidente de la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid (Adimad), que no es partidario de repetir la prueba. “Quedará recogido en el acta de la comisión organizadora y se pedirán explicaciones a la comisión de materia que puso el examen”, avanza Álvarez, que apunta el origen del problema: “Parece que esta comisión, con dos profesores de instituto y el resto, de la universidad, cometió el incompresible error de usar el temario de hace 10 años”. El representante de los directores recuerda a los estudiantes que están en su derecho de pedir revisión. Las notas saldrán el 16 de julio, momento en el que se abre el periodo de reclamaciones.

Carlos de Carlos, historiador y coordinador de la EvaU en la Autónoma, también resta importancia a lo sucedido. “Es un error humano que se ha magnificado”, opina De Carlos, que cree que “los alumnos no son tontos” y que se “entendía bien”. Según De Carlos, ha afectado “a muy pocos alumnos” y solo hay una reclamación oficial y alguna queja informal, como dos correos que ha recibido él mismo. “Cuando se está con los nervios a flor de piel, en chavales de 17 y 18 años, un error así les puede hacer dudar de si se lo saben o no y confundir, puede ser un factor que desate ansiedad y penalizar su rendimiento”, le replica Jesús de Blas Ortega, doctor y profesor de Geografía e Historia del IES Joaquín Rodrigo de Vicálvaro, en un correo enviado a la coordinación de la EvAU.

Desde esta mañana, los exámenes se están corrigiendo. Un miembro del tribunal de Móstoles con 30 años de experiencia y que prefiere no dar su nombre tiene 150 exámenes sobre la mesa y, de siete que ha corregido, ha suspendido a uno. Su coordinador le envió un correo en el que, en la línea de lo decidido finalmente, le pidió “benevolencia” y que dé por correctas las dos posibilidades. Esta docente, que se dio cuenta del “despropósito” nada más repartir del examen, cree que sí es grave y que inducía a “una confusión enorme”.

Isabel Galvín, responsable de enseñanza de CC OO Madrid, reclama a la Consejería de Educación que aclare lo sucedido, que “se asuman responsabilidades” y que se den a todos los tribunales “instrucciones que eviten una penalización” y que cada tribunal acabe haciendo “lo que le parezca”. El sindicato también incide que este tipo de errores “se repiten todos los años y no es aceptable”, por lo que proponen que “un profesor de Bachillerato en activo revise las pruebas”. Adimad también reclama que se evalúe “el procedimiento y composición de las comisiones que preparan los exámenes, porque todo el proceso es muy opaco y no es la primera vez que ocurren cosas parecidas”.



Por qué la FP se ha convertido en la opción más atractiva en España

El reciente informe presentado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional revela que las matriculaciones en FP se han incrementado en más de 50.500 alumnos con respecto al año anterior.

larazon.es 09/07/2020

En total el alumnado en enseñanzas de régimen general no universitarias asciende a 8.276.528 alumnos, de los cuales 4.273.011 son hombres y 4.003.517 mujeres, según los Datos Avance de las Enseñanzas no universitarias del curso 2019-2020. Zigor Maritxalar, CEO de [Implika](#) y experto en Educación, comenta la evolución que durante los últimos años ha convertido a la FP en la opción más atractiva para los alumnos españoles.

La Formación Profesional (FP) continúa aumentando su popularidad y ha dejado de estar condenada al ostracismo para convertirse en una opción con alto nivel de empleabilidad, lo que ha supuesto el crecimiento de las matriculaciones en todos sus ciclos. Pero ésta no es la única razón:

“Que la Formación Profesional cuente con una inserción laboral tan elevada no es casual. En la actualidad son los estudios profesionales más cercanos a la realidad del mercado de trabajo y dan respuesta a la necesidad presente de personal especializado en los distintos sectores profesionales.”- Destaca el CEO de Implika, Zigor Maritxalar.

Las enseñanzas de Formación Profesional presentan el incremento más significativo este año, concretamente 50.511 alumnos más que el curso anterior sobre los que destacan el Grado Medio un 5,9% y el Grado Superior un 6,6%. Una parte significativa de este crecimiento es debido al aumento del régimen a distancia, que se incrementa en un 7,1% en el Grado Medio y un 12,6% en el Grado Superior.

Este aumento en el interés de la elección de la FP frente a otras opciones está relacionada con las mejoras efectuadas en estas formaciones que, según indica Zigor Maritxalar, son las siguientes:

1.- Los nuevos itinerarios formativos aceleran los tiempos.

Las recientes sinergias entre la FP y la Universidad dan acceso a la preciada doble titulación y en solo 4 años es posible obtener un Grado Superior en Formación Profesional más un Grado Universitario, lo que supone, además, empezar una carrera profesional con una experiencia de 800 horas (aproximadamente) de prácticas en empresas. Esto aumenta el atractivo del perfil del alumno para el mercado laboral desde el primer momento.

2.- La posibilidad de un modelo educativo híbrido o a distancia.

No es tan necesario el tiempo que se invierte en las aulas como los resultados que se alcanzan. La optimización de estos nuevos sistemas de enseñanza se ha acelerado debido al confinamiento que hemos vivido. Así mismo, en España hemos aprendido a potenciar nuestra capacidad de gestión del tiempo para estudiar o trabajar, así como la autonomía para el aprendizaje. Hoy en día, estudiar en un sistema mixto (presencial y distancia) o a distancia, se ha convertido en una opción con altas garantías de éxito para los alumnos.

3.- La atenta mirada a las necesidades del mercado laboral.

Solo en lo que va de 2020 se han impulsado 80 nuevas titulaciones de FP. Esto supone la profesionalización y acreditación de competencias que hasta el momento no lo estaban y eran requeridas por el mercado laboral. Esta mirada global es necesaria para cualquier tipo de formación, ya que las posibilidades profesionales son cada vez más amplias y es necesario actualizar los contenidos pedagógicos y las titulaciones. En este sentido, la Formación Profesional a día de hoy está a la vanguardia.

Este año además las estadísticas sobre matriculación en Formación Profesional se muestran igualadas por géneros, siendo superada por las mujeres en la formación a distancia donde son clara mayoría, tanto en Grado Medio (60,3%) como en Grado Superior (60,8%).



Los directores ven inasumible la guía de Educación sobre la covid para el próximo curso

No descartan dimisiones en los equipos directivos de los centros de Secundaria si la Consejería no toma medidas para implementar las recomendaciones sanitarias sobre el coronavirus en los centros

Alberto Sánchez 09.07.2020

El ambiente se ha caldeado entre los equipos directivos de los centros de Secundaria de la Región tras publicar las consejerías de Educación y Salud la guía con las directrices en relación a las medidas de prevención e higiene frente a la covid-19 para los centros educativos en el curso 2020-2021. La guía, que recoge también recomendaciones, es «inasumible» para los equipos directivos de los institutos dado que sobre ellos cae la responsabilidad de crear y gestionar los planes de contingencia sobre el coronavirus el próximo curso. Los centros están obligados a diseñar un plan que recoja la señalización, protocolos de limpieza y desinfección, horario escalonados de entrada y salida, horarios escalonados de recreo, tránsito y uso de las zonas comunes, uso del comedor e indicaciones para el uso del *transporte escolar*.

No se ve la posibilidad en estos centros educativos de implementar todas las medidas si la Consejería de Educación no regula en aspectos como ratios de alumnos por clase, desdoble de grupos, aumento de plantilla, y que acompañe todo esto con un mayor presupuesto para el inicio de curso. El próximo lunes la Comisión Regional de Directores de Secundaria se reunirá con la Consejería para tratar estas quejas que se han producido en la última semana. Algunos directores de instituto ya adelantan que dimitirán del cargo si no se plantean soluciones y si se sigue dejando el peso de solucionar la seguridad sanitaria de los centros en los equipos directivos.

«Sin agotar las vías de negociación, los institutos pondrán encima de la mesa este problema, pero se ha percibido un ambiente negativo entre los directores», subraya Raimundo de los Reyes, presidente de la

Asociación de Directivos de Centros Públicos de Enseñanza Secundaria de la Región. «Es inviable llevar a cabo muchas actuaciones que ambas consejerías plantean en la guía y la única posibilidad que vemos para que se puedan realizar las directrices es apuntar hacia la semipresencialidad».

La Consejería de Educación ya planteó que el inicio de curso sería completamente presencial y que los trabajos que se estaban realizando iban encaminados a llegar a este punto si la situación de la pandemia lo permite.

Ante esto, «no podemos garantizar condiciones de seguridad, por lo que nos resulta inasumible y debemos rechazar rotundamente los planteamientos de la guía», sentencia el presidente de ADES Murcia.

Más profesores para cumplir las directrices

Los sindicatos continúan protestando por la falta de anuncios por parte de la Consejería de Educación sobre si se ampliarán o no las plantillas del profesorado el próximo curso. Les preocupa que la Orden de Recursos Humanos de Educación para el curso 2020/2021 no contemple bajadas de horario lectivo del profesorado y el refuerzo de la acción tutorial. Educación no da por cerrada la posibilidad de contratar más profesores y espera a que terminen las matriculaciones.

EL MUNDO CATALUNYA

Detectan un brote de Covid-19 con cuatro contagiados en el claustro de un instituto de Tarragona

EL MUNDO. Barcelona. Jueves 9 julio 2020

Tres nuevos brotes de coronavirus en Tarragona.

El más importante, originado entre el claustro de profesores de un centro educativo de la localidad tarraconense de Perelló, afecta a cuatro de los profesores del Instituto Blanca d'Anjou y se generó después de una reunión presencial entre los docentes, según ha confirmado el Departamento de Salud de la Generalitat, afecta a cuatro de los profesores del Instituto Blanca d'Anjou y se generó después de una reunión presencial entre los docentes.

Tras detectar los cuatro positivos, el Gobierno catalán ha ampliado el rastreo a 46 contactos estrechos de los contagiados. El primero de ellos presentó síntomas el 30 de junio y ninguno ha necesitado ser hospitalizado por el momento.

El instituto anuncia a través de su web que el centro educativo permanecerá cerrado "por motivos sanitarios". Si bien la actividad docente finalizó hace semanas, se evita así la presencia de padres para formalizar la matrícula de sus hijos u otras gestiones administrativas.

OTROS DOS BROTES

La Generalitat también vigila otro brote en Tarragona: tres personas dieron positivo y 34 más fueron aisladas tras participar en una fiesta particular en la localidad de Alcanar.

El tercero se ha dado en un núcleo familiar de la ciudad de Tarragona con cinco positivos confirmados con prueba de diagnóstico PCR y se está haciendo el seguimiento a 20 contactos.

europapress.es

La Selectividad más anómala de la historia finaliza este viernes: más tardía, con mascarilla y aumento de sedes

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 10 de julio finaliza la convocatoria más anómala que se recuerda de la Evaluación de Bachillerato de Acceso a la Universidad (EBAU), la antigua Selectividad, pospuesta este año hasta verano por la pandemia de coronavirus. Los estudiantes de Navarra fueron los primeros en examinarse (entre el 23 y el 26 de junio), mientras que los de La Rioja y Cantabria serán los últimos en hacerlo, en concreto, este viernes 10 de julio.

Los exámenes, a los que se presentan cada año más de 200.000 estudiantes en toda España, se han realizado con medidas excepcionales para evitar contagios, como el uso de mascarillas o la multiplicación de sedes, incluyendo pabellones deportivos o recintos feriales, que han facilitado el mantenimiento de dos metros de distancia entre estudiantes.

En Aragón, por ejemplo, se ha pasado de las 14 sedes del año pasado a 84, y su Gobierno recomendó acudir a pie a los exámenes para prescindir del uso del transporte público, mientras que en Asturias se han transformado pabellones deportivos de Oviedo y Gijón en enormes salas de exámenes, aunque no tan grandes

como el inmenso Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo (Vizcaya), un recinto ferial que también ha acogido las pruebas en País Vasco.

En cualquier caso, los estudiantes han tenido que acudir a las sedes de la EBAU con antelación, estando vetada la asistencia de personas que mostrasen síntomas de coronavirus. De hecho, algunas comunidades recomendaron medirse antes la temperatura corporal. Tampoco se ha admitido la compañía de familiares en los recintos salvo para estudiantes con diversidad funcional. Y antes de tomar asiento, todos han tenido que limpiarse las manos con gel hidroalcohólico.

Dentro del aula, además de la desigual obligación de usar mascarillas, las instrucciones han diferido en cada comunidad. En Castilla y León, los estudiantes han tenido que guardar sus materiales en bolsas de plástico, mientras Asturias obligaba a recogerse el pelo a los jóvenes melenudos, así como a hacer todas las pruebas en el mismo asiento del aula. A la hora de entregar los exámenes, Andalucía recomendaba el uso de guantes. Después, los folios pasaban seis horas "hibernando" antes de que los vuelva a tocar otra persona en esta comunidad.

La salida del aula ha sido igual de ordenada y pautada para impedir los corrillos de estudiantes. Mientras Extremadura prohibía "reuniones de grupo por mínimas que sean en los descansos" y comer en espacios cerrados, Madrid aconsejaba acudir a las pruebas con "agua, alimentos y material para su consumo personal". Y en Cataluña, directamente, se prohibió el uso de máquinas expendedoras de comida y fuentes de agua.

"NORMALIDAD" EN LA CELEBRACIÓN DE LAS PRUEBAS

En la mayoría de comunidades autónomas se han celebrado las pruebas sin ningún tipo de incidente. De hecho, tal y como destacó este martes la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, las pruebas se estaban celebrando "con normalidad". Y eso que, según afirma a Europa Press el secretario de Estado de Educación y FP, Alejandro Tiana, ha habido un incremento en el número de alumnos que se han presentado a las pruebas este año con respecto a 2019.

La Selectividad de 2020 estaba prevista inicialmente a principios de junio en todas las comunidades autónomas. El estado de alarma, que decretó el cierre de todos los centros educativos el 16 de marzo, obligó a retrasar la fecha de las pruebas. Esa fue la primera gran decisión en el ámbito educativo acordada por el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas durante el conamamiento.

Navarra ha sido la comunidad que más temprano ha iniciado los exámenes de Selectividad, entre el 23 y 26 de junio. También Asturias y Extremadura comenzaron esta convocatoria en junio, en concreto, el día 30, alargándose en ambas hasta el 2 de julio.

En los primeros días de julio, del 1 al 3, fue el turno de los estudiantes de Castilla y León y de Canarias, aunque en el caso de los del archipiélago, la Selectividad se extendió hasta el día 4.

Del 6 al 8 de julio fueron los alumnos castellanomanchegos, murcianos y vascos los que realizaron las pruebas. También se celebraron estos días los exámenes en la Comunidad de Madrid, aunque en este caso se alargaron un día más, hasta el 9 de julio.

Y en las comunidades de Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana, la Selectividad se desarrolló entre el 7 y el 9 de julio, siendo los de Cantabria y La Rioja los que más tarde han celebrado la actual EBAU, del 8 al 10 de julio

EL PAÍS

La selectividad valenciana incluye por error 'La fontana de oro' en los 'Episodios nacionales' de Galdós

El examen de Historia propone un comentario de un extracto del libro que el escritor canario publicó dos años antes de su obra enciclopédica más conocida

FERRÁN BONO. VALENCIA 09 JUL 2020

Con motivo del centenario de su fallecimiento, Benito Pérez Galdós ha vuelto a ser noticia este año tanto por la publicación de libros sobre su vida y la reedición de algunas de sus obras como por el enésimo debate sobre su calidad literaria. Al calor de esta conmemoración, el examen de Historia, obligatorio para todos, de la selectividad, ha incluido un extracto de su primera novela *La fontana de oro*, con el objeto de preguntar y solicitar un comentario sobre la historia de España del primer tercio del siglo XIX. Debajo del texto, se cita el título de la novela sobre el famoso café madrileño y se señala que pertenece a los *Episodios nacionales*, la enciclopédica obra que consagró al autor canario.

Sin embargo, *La fontana de oro* fue publicada dos años antes, en 1870, está considerada su primera novela, y no forma parte de los 46 títulos de los episodios históricos que redactó posteriormente, entre 1872 y 1912. Algunos profesores se percataron del error, una vez ya se había repartido los exámenes, y también algunas madres como Isabel, que vive en Valencia. "Mi hija tuvo problemas con el comentario del examen de Historia y lo estuvimos mirando. Por eso me di cuenta de que no era de los *Episodios nacionales*", explica a este periódico. "Ni yo, ni nadie de mi clase nos percatamos", comenta Paula, la hija. Casi 24.000 alumnos de la

Comunidad Valenciana han participado en las pruebas de acceso a la Universidad que han concluido este jueves.

La Consejería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat valenciana también ha reconocido el error y señala que los alumnos pueden escribir una queja que será atendida por los especialistas de la asignatura que deberán también responder por escrito. En la prueba se ofrecían cuatro opciones para escoger dos. El examen de cada asignatura lo prepara un grupo de profesorado universitario de las instituciones públicas valencianas. La comisión está formada por cinco personas por cada asignatura. Fuentes de la consejería aseguran que los errores detectados en las pruebas han sido "mínimos y resueltos en el momento del examen correspondiente. No se ha anulado ninguna pregunta". Al tratarse de un examen de Historia y no de Literatura, las consecuencias de la inclusión de *La fontana de oro* dentro de los *Episodios nacionales* son más reducidas, aunque el error no deja de llamar la atención.

La publicación digital de información local *Valle de Elda* ha sido la primera en darlo a conocer. En su edición de hoy, la coordinadora de la selectividad de la Universidad de Alicante Mariola Molina, que ha reconocido el error, indica que los correctores se reunirán el viernes para comentar las incidencias.

También en el examen de Historia de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EBAU) de la Comunidad de Madrid se ha incurrido en un error en la redacción y al pedir que se analizaran unos años del reinado de Isabel II que, en realidad, se corresponden, aunque no exactamente, con los de la regencia previa de su madre, María Cristina y del general Espartero.

MAGISTERIO

Aumentan en un 22% los alumnos que se presentan a la EvAU en Madrid

Más de 41.000 alumnos se presentan, desde hoy hasta el 9 de julio, a las pruebas de la EvAU de la Comunidad de Madrid, lo que supone un incremento del 22% con respecto al año pasado y que previsiblemente afectará a las notas de corte.

REDACCIÓN Lunes, 6 de julio de 2020

En la Universidad Complutense de Madrid se examinarán 13.883 alumnos (+20,19%), en la Universidad Carlos III otros 5.680 (+24,73%), 10.893 en la Universidad Autónoma de Madrid (+18,87%), en la Universidad de Alcalá de Henares 5.297 (+29,86%), otros 3.975 en la Universidad Rey Juan Carlos (+26,15%), y finalmente en la Universidad Politécnica se examinarán 1.586 estudiantes (+25,77%).

Desde la Universidad Complutense han trasladado a Efe que el aumento de los alumnos puede deberse a la "circunstancia excepcional" que ha experimentado el modelo educativo durante el confinamiento provocado por la crisis sanitaria del coronavirus. Los alumnos tendrán que demostrar los conocimientos adquiridos durante el Bachillerato en la EvAU y, desde la universidad, apuntan que el porcentaje de aprobados podrán mantenerse en relación con años anteriores pero las dificultades vendrán en las notas de corte, ante un posible aumento de la demanda universitaria.

Las universidades públicas de Madrid realizarán en sus sedes de forma presencial las pruebas de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU, antigua selectividad) los días 6, 7, 8 y 9 de julio, en las que se deberá llevar mascarilla durante toda la prueba, aconsejándose una por examen, y se hará una entrada escalonada a las aulas para evitar contagios.

Las pruebas para acceder a la universidad se realizan esta semana en toda España, pues si bien alguna comunidad aprovechó el final de junio para hacerlas, esta semana la mayoría llama a sus alumnos para realizar unos exámenes retrasados por el coronavirus y presididos por medidas especiales. En Cantabria las pruebas se harán del 8 al 10 de julio.

Esta semana comienza la EBAU/EVAU en 12 comunidades: Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana, País Vasco y La Rioja. Mientras que los estudiantes de Asturias, Canarias, Castilla y León, Extremadura y Navarra ya las han realizado.

Medidas especiales

Más sedes y espacios en las universidades para hacer las pruebas, a los que se suman en algunos sitios institutos, separación de 1,5 metros entre las mesas donde se examinan los alumnos y tener a disposición geles son algunas de las medidas de higiene y seguridad que tienen que cumplirse.

Los alumnos, examinadores y personal de seguridad deben llegar al examen con mascarilla y no pueden intercambiarse ningún material como bolígrafos.

En algunas facultades como las de la Universidad Complutense de Madrid, los estudiantes entrarán directamente a los edificios asignados y en su aula deberán sentarse en los asientos marcados con una pegatina, donde habrá una pulsera de un color que servirá para identificar los baños y espacios comunes establecidos para ellos.

También en muchas ciudades habrá refuerzos del transporte y controles de afluencia para que las personas lleguen con más tranquilidad.

Este curso hay 6.000 titulados más en Bachillerato en Andalucía con los nuevos criterios

Los nuevos criterios académicos aplicados por la pandemia de coronavirus han provocado que este año aumenten en Andalucía las titulaciones en Bachillerato, que han pasado de 23.191 del año pasado a 29.443 de este curso, 6.252 más, según datos de la Consejería de Educación y Deporte.

REDACCIÓN Lunes, 6 de julio de 2020

En este curso 2019-20 se registraron 56.202 matrículas en 2º de Bachillerato, de las que 29.443 obtuvieron el título en la convocatoria ordinaria, lo que supone el 52,39% del total. En el curso pasado hubo 57.717 matriculas en el mismo nivel educativo, y de ellas 23.191 obtuvieron el título en la convocatoria ordinaria, que corresponden al 40,18% del total.

El alumnado que ha superado 2º de Bachillerato puede presentarse a las pruebas de acceso a la universidad, cuya convocatoria ordinaria se celebra desde mañana y hasta el 9 de julio y la extraordinaria del 14 al 16 de septiembre.

La pandemia ha generado un gasto extraordinario de 570 millones de euros en Educación, según ha explicado el consejero Javier Imbroda en una reunión con periodistas, en la que ha destacado que el Gobierno andaluz pondrá ese dinero independientemente de lo que aporte el Ministerio de Educación. Entre los gastos extraordinarios, el consejero ha citado los 150.000 dispositivos nuevos que se comprarán para que los docentes, 36.000 de los cuales han adquirido competencias informáticas durante el último trimestre de clases no presenciales.

Para el próximo curso, Educación ha elaborado planes junto a Salud para abordar posibles contagios, y lo hará dando flexibilidad a los centros y repartiendo al alumnado entre grupos para poder hacer un seguimiento en caso de que alguien padezca la enfermedad. En última instancia, será Salud la que tome una decisión de si cierra el colegio en caso de un contagio o si solo se aísla al grupo que ha estado en contacto con la persona que ha contraído el coronavirus, según el consejero.

“Hay que aprender a convivir” con el coronavirus, ha explicado Imbroda, quien ha destacado que hubo problemas en los primeros días de matriculación telemática, en parte porque los servidores informáticos tenían diez años, pero luego se resolvieron y se han gestionado 145.000 matrículas en tres días.

La viceconsejera de Educación, Carmen Castillo, ha añadido que la pandemia provocó un cambio en los hábitos educativos en pocas horas y ha asegurado que han hecho una planificación para que, si se produce otra crisis sanitaria, “no nos vuelva a pillar. Una vez nos pillan, dos ya no”, ha resaltado.

Una de las primeras medidas para el próximo curso es un examen para conocer el nivel de conocimientos de un alumnado que en septiembre llevará seis meses sin clases, y los que “más preocupan” son los de 13 y 14 años, “los que se pierden” con más facilidad para seguir en el sistema educativo, ha precisado.

Dentro de esa planificación se incluyen los 6.260 docentes de más que se van a contratar para el próximo curso, una cifra que es a la que “ha podido llegar” Educación y tras lo cual se ha pedido dinero a la Consejería de Hacienda, que ha aceptado la solicitud, según Imbroda y Castillo. De los docentes que se contratarán, 4.014 son para los centros públicos (1.864 maestros de Primaria y 2.150 profesores de Secundaria) y 970 para los centros concertados (674 maestros y 296 profesores).

Otros de los problemas que ha provocado la pandemia ha sido la ampliación del sistema informático disponible para la conectividad entre el alumnado y los docentes, y la Consejería está negociando con multinacionales como Google cómo hacerlo sin infringir las leyes de protección de datos, que es el mayor escollo para Educación, ha apuntado la viceconsejera.

La Asociación de Centros de FP presenta sus propuestas para la organización del curso 2020-21

Entre las medidas que se solicitan destacan la reducción del número de estudiantes en las clases y talleres prácticos, la dotación de material de protección sanitario a los centros y garantizar el acceso a herramientas informáticas de alumnado y profesorado

REDACCIÓN Martes, 7 de julio de 2020

La Asociación de Centros de Formación Profesional (FP Empresa) ha elaborado un [documento](#) con sus propuestas para la organización y óptimo desarrollo del curso escolar 2020-21 para la Formación

Profesional. En el proceso de consenso de las medidas a adoptar para garantizar la vuelta a las clases han participado más de 200 representantes de los centros de FP que integran la asociación.

Tras el cierre de los centros educativos y las restricciones ocasionadas por la crisis del Covid-19, los más de 850.000 estudiantes de Formación Profesional en España han visto gravemente afectado su progreso escolar y en el 80% de los casos no han podido finalizar sus prácticas en empresas, correspondientes al módulo obligatorio de Formación en Centros de Trabajo (FCT).

“Los ciclos de Formación Profesional han sido el nivel educativo más afectado por el cierre de los centros. Con la experiencia de los últimos meses y dada la gravedad de las consecuencias que puede tener una mala planificación de la vuelta general a las aulas, se ha de tener muy en cuenta que el próximo curso no puede improvisarse”, explica Luis García Domínguez, presidente de FP Empresa.

Propuesta de la asociación

Más del 92% de los centros de FP que han participado en este documento consideran que las mejoras implementadas durante la pandemia para la formación a distancia deberían mantenerse cuando se supere el riesgo de Covid-19. Sin embargo, la formación práctica, tanto en los centros de Formación Profesional como el módulo de FCT, no se han podido realizar en un porcentaje cercano al 80%.

Con el fin de garantizar el éxito del alumnado en su formación tanto teórica como práctica, FP Empresa propone cinco puntos que las administraciones deben reforzar de cara a los posibles escenarios en los que se desarrolle el curso 2020-21:

- 1.- Para la *formación presencial en talleres, laboratorios o instalaciones específicas* de FP es fundamental reducir el número de estudiantes, aumento de profesorado para las tareas prácticas y compra de medidas de prevención específicas: mamparas, mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico, etc.
- 2.- *Establecer, supervisar y garantizar los protocolos de seguridad* (Covid19+prevención ordinaria) en cada uno de procesos productivos y flujos de trabajo que se realizan en la Formación Profesional.
- 3.- *Promover y mejorar la enseñanza a distancia* dotando al profesorado y a los estudiantes con equipos y formación específica, con acuerdos marcos en Europa o en España de licencias de software para FP y con la creación de un repositorio público y abierto de materiales online por ciclo formativo.
- 4.- *Reforzar la capacidad de teleformación* y la formación mixta de los Centros de FP y creación, desde las administraciones educativas, de equipos de trabajo por ciclos para la generación de contenidos digitales.
- 5.- *Flexibilizar el sistema de desarrollo de la FCT y Dual* en caso de interrupción parcial o total y/o aplazamiento hasta normalización para incorporación en empresa.

“Las administraciones deben evaluar las características y necesidades de cada centro y proporcionar los medios precisos para que el alumnado complete su formación teórica y práctica. Es importante tener muy en cuenta la autonomía de gestión de los centros y confiar en el criterio profesional de los equipos directivos y docentes de los mismos, hacer el seguimiento y evaluación. Es importante tener muy en cuenta la autonomía de gestión de los centros”, concluye García Domínguez.

Los jóvenes de 18 años se inclinan por los estudios superiores en periodos de recesión

Los jóvenes que a los 18 años viven tiempos de recesión o de altas cifras de desempleo son más propensos a matricularse en enseñanzas de Educación Superior y a terminar sus estudios universitarios de Grado o Posgrado, según un reciente informe.

DIEGO FRANCESCH Martes, 7 de julio de 2020

Las fundaciones Ramón Areces y Europea Sociedad y Educación han publicado un nuevo documento que lleva por título ***Impacto de los ciclos económicos sobre las decisiones de los estudiantes de Educación Superior***. Las conclusiones de este estudio, del que son autoras Jennifer Graves y Zoe Kuehn, profesoras de economía de la Universidad Autónoma de Madrid, muestran que en las decisiones de los jóvenes de 18 años sobre sus estudios universitarios influyen los ciclos económicos de sus países, en particular, las altas cifras de desempleo o de recesión.

Aunque este tipo de estudios sobre los mecanismos que influyen en decisiones sobre la matriculación, continuar o abandonar la carrera, el tiempo que quieren emplear en obtener el título y especializarse en un campo u otro, son frecuentes en Estados Unidos y en otros países, en España apenas se han realizado con anterioridad. De ahí la importancia no solo de esta contribución, sino de llevar a cabo **estudios comparados** que profundicen y anticipen las consecuencias para la Educación y la formación de los ciclos económicos.

Entre los hallazgos principales de la monografía, en España, los alumnos que, a los 18 años viven tiempos de recesión o de altas cifras de desempleo –como la actual– son más propensos a matricularse en enseñanzas de

Educación Superior y a terminar sus estudios universitarios de Grado o Posgrado. Sin embargo, también se observa que *aumenta el abandono* de este tipo de estudios entre los alumnos que, a esa edad, están inmersos en coyunturas económicas desfavorables.

Por todo ello, las autoras señalan que las políticas que se desarrollen en el ámbito del sistema educativo en el contexto actual de crisis deberían tener en cuenta estos aspectos:

1. El aumento del número de matriculaciones en Educación Superior en ciclos económicos de recesión requerirá *cambios en la planificación y asignación de recursos* por parte de las administraciones y de las propias universidades.
2. *Este aumento no será homogéneo*, ya que los problemas de capacidad económica provocados por la crisis del Covid-19, varían significativamente entre sistemas educativos.
3. *El posible incremento de las cifras de abandono implicaría una pérdida de tiempo y dinero* por parte del alumno y un gasto público ineficiente, lo que hará necesario un mayor seguimiento y acompañamiento de estos jóvenes.
4. El efecto de la matriculación, si bien conduce a un mayor abandono, también da lugar a una *mayor graduación con éxito*.
5. *En España no se estima ningún efecto significativo del ciclo económico sobre la elección de la especialización* o sobre el tiempo de obtención del título. Por el contrario, en Estados Unidos, los estudiantes que a los 18 años viven tiempos macroeconómicos peores, son más proclives a elegir titulaciones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas).

EL DIARIO de la EDUCACIÓN

Desconfianzas ante el nuevo curso académico

El camino no va a ser fácil, pero hay que andarlo. Todas las fuerzas harán falta, y vendrá bien remar todos en la misma dirección.

Manuel Menor Currás. 6 julio, 2020

Los datos demoscópicos parecen apuntar en la doble dirección; por un lado, una tendencia esperanzada de recuperación, mientras por otro son visibles bastantes miedos y reticencias. Las noticias sobre control de esta COVID-19 también tienen doble vertiente: sabemos más acerca de cómo funciona y parece que tengamos más cerca una posible vacuna, pero también es verdad que nadie es capaz de infundir calma suficiente ante los posibles brotes que resurgen en unos y otros puntos.

Consensos/disensos

En nuestro plano político más cercano, y al margen de la exuberancia expresiva de las hipótesis que cada cual esté dispuesto a oír en esta precampaña electoral del País Vasco y Galicia, tres asuntos merecen especial atención. Ante todo, el acuerdo alcanzado en el Congreso para el decreto que regule el final de la desescalada, el más amplio de los logrados por esta coalición gubernamental: al menos, ha aliviado las gesticulaciones hoscas que tanto daño hacen a la convivencia; lo acordado respecto a la Sanidad va también en esa dirección, la más adecuada para salir adelante. Sin embargo, los muertos han vuelto a volar por los aires; no son los mismos los de unos y los de otros, y por mucho que estemos en democracia parecen querer dominar la escena de la convivencia por encima de los vivos. Defendiendo su memoria a pedradas, al estilo ancestral prejuiciado de raíz, ni algunas escenas de las vividas estos días en Euskadi, ni las protagonizadas en el Congreso y alrededores, han estado a la altura de lo que exige el sentido de su memoria. En tercer lugar, en bastantes barrios es notoria la desescalada de aplausos y caceroladas, gesticulaciones ambas poco propicias para gestionar la normalidad, si es que a esto en que estamos entrando puede llamarse normalidad.

Nuevos paisajes sonoros

En la calle, en las plazas y en las playas, se ve y oye de todo. Ansiedades, insatisfacciones, urgencias, despreocupaciones, movimientos corales impacientes y urgentes, conviviendo con escenas calmas, pacientes y bien humoradas por más que, a veces, se casen muy mal. A la inseguridad que genera el no saber bien si ponerse o quitarse la mascarilla o tener que aprender de nuevo para moverse, lavarse y distanciarse, como si se fuera un infante, se sobrepone la ansiedad demostrativa de estar por encima del bien y del mal, la muy

interesada fórmula para sacar provecho, o el ruidoso encuentro que en cinco minutos de elevar la voz para no aburrirse por no saber qué hacer, puede terminar en follón de narcisismos desarbolados.

Las aceras, las playas y los cafés son en este momento espacios de gran aprendizaje social para todos, de necesaria expansión de la personalidad de cada cual, de buen negocio para algunos y de gran desesperación para muchos, a quienes parece que los demás hacen o no hacen lo que habría que hacer. Viejísimos es, de las tablillas cuneiformes, la constatación de que los mayores miran con ojos prevenidos y malhumorados los nodos adolescentes. Las interacciones en que todos estamos empezando a movernos de nuevo darán pie –como siempre, pero en un ambiente de aparente novedad- para múltiples reacciones que hemos de aprender a controlar otra vez.

Afrontar un nuevo curso

El “abandono” de la educación pública lo describió hace unos días Guadalupe Jover “Nuestras administraciones educativas se han lavado las manos. No sabían qué hacer y han optado por la dejación de funciones”. La sempiterna desigualdad de trato ha saltado estos días más a las claras; las deficiencias ancestrales –anteriores a que existiera ninguna de las tropecientas leyes, decretos, órdenes y resoluciones ministeriales- han sido más evidentes. El capital cultural, social y económico de las familias es radicalmente distinto, y no se arreglará por mucho ordenador que se facilite a los niños; tampoco las escuelas e institutos con infraestructuras obsoletas, organizaciones internas que son un contrasentido. De cara al próximo curso, por mucho que las explicaciones queden aparentes, existen múltiples agujeros cuya responsabilidad de arreglar va a corresponder –como casi siempre- a la muy “noble” “vocación” de los enseñantes, tan halagada en el BOE como mal soportada en un reconocimiento efectivo. En momentos de crisis, cuando no hay trayectoria de fondo, todo el mundo echa balones fuera; no parece que sea el momento para que la sociedad en general, y la Administración en particular, demuestren querer que sus maestros y profesores sobrepasen el nivel del peonaje. Si alguien entiende que tratarles con la seriedad que merece un profesional cualificado, se arregla cualquier día con una gran manifestación de aplausos, se encontrará con reclamaciones –algunas muy viejas- como las que acaban de hacer los sanitarios, cansados de que no les den lo que en justicia merecen. No es cuestión de gremialismo medieval, sino de dignidad de una sociedad democrática.

Unos días antes, Francisco Delgado también llamaba la atención sobre lo alejados que andaban todos –a doce semanas de que empiece el nuevo curso- para que el gran objetivo para el que nació la enseñanza pública pueda cumplirse: la compensación de las desigualdades en el conocimiento y las habilidades culturales, para que todos los ciudadanos sean iguales. Demasiados condicionantes a superar –incluidas tradiciones asentadas de desigualdad- para que pueda salir bien la intencionalidad que la ministra Celáa pregona para su ley. En este momento –tal como la COVID-19 ha dejado al aire la fragilidad y desigualdad que tiene el sistema educativo-, es puro voluntarismo cuando cada autonomía parece circular por “una autopista diferente”, y cuando los *Acuerdos de 1979* con el Vaticano sostienen una estructura educativa más de 1851 que de 2020. En ese panorama, según Delgado, los 2.000 millones que el Gobierno acaba de habilitar –“erróneamente, de forma lineal”- acabarán nutriendo en gran medida a la escuela privada religiosa, “la de los sectores más acomodados, esa que el Estado, a través de la LOE y la LOMCE, se ha empeñado, en considerar como pública”.

Poco hay que añadir salvo que, o la nueva normalidad trae una nueva exigencia de ética colectiva en el trato a la escuela pública o, en el curso próximo, el sistema educativo se colapsará más por donde menos falta hace. El ejemplo de lo acontecido con las residencias geriátricas y con los propios hospitales públicos en estos tres meses pasados, debiera servirnos de preaviso. ¡Atentos!

Manuel Menor Curras es Licenciado en Historia y Doctor en Pedagogía.